

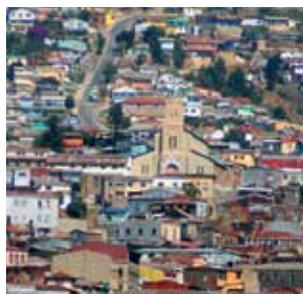


CENTRO DE
**POLÍTICAS
PÚBLICAS UC**

TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA

Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2012 «Una mirada al alma de Chile»

Seminario 16 de enero, 2013



Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2012 «Una mirada al alma de Chile»

Seminario 16 de enero, 2013

Índice

Prólogo

IGNACIO SÁNCHEZ, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile 5

Introducción

CRISTIÁN ZEGERS, director del diario El Mercurio 7

NICOLÁS EYZAGUIRRE, presidente del directorio de Canal 13 9

Exposiciones

1. Las tensiones del desarrollo social en Chile hoy: movilidad individual y frustración social 11

IGNACIO IRARRÁZAVAL, director del Centro de Políticas Públicas UC

MARÍA IGNACIA ARTEAGA, investigadora asociada del Centro de Políticas Públicas UC

Comentario

LUIS LARRAÍN, director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo 23

RODRIGO MÁRQUEZ, investigador del equipo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) 28

2. Violencia pública y privada en el Chile actual 34

EDUARDO VALENZUELA, director del Instituto de Sociología UC

Comentario

JAVIERA BLANCO, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana 41

RODRIGO PANTOJA, jefe del Departamento de Reinserción Social del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública 50

Prólogo

Nuestra misión como Universidad Católica es crear conocimiento a la luz de la fe y compartirlo entre académicos, alumnos y profesionales para luego traspassarlo a la sociedad a través de proyectos que atiendan las necesidades prioritarias del país. Este es un trabajo que nos interesa hacerlo bien, con excelencia. Por eso hoy nos sentimos orgullosos de ver cómo una iniciativa de enorme relevancia para nuestra universidad y el país entero, como la Encuesta Nacional Bicentenario que anualmente realizamos con Adimark GfK, se encuentra ya en su séptima versión.

En este contexto, nos honra poder presentar este documento que constituye un reflejo del seminario que nuestra universidad, en conjunto con El Mercurio y Canal 13, realizaron en enero de 2013 para contextualizar los resultados de la última versión de la encuesta. Lo que sigue es, por tanto, una reflexión seria y profunda a cargo de destacados académicos y expertos sobre la sociedad chilena, de cómo somos y también de cómo creemos que somos los chilenos. En otras palabras, una mirada al alma del Chile del Bicentenario.

Los análisis que aquí se entregan dan cuenta de los procesos por los que atraviesa el país. Vemos que nuestros compatriotas se encuentran bastante más satisfechos con su vida familiar, con grandes expectativas respecto del bienestar de sus hijos, pero desconfiados de las instituciones y de su capacidad para solucionar los problemas más urgentes.

El estudio también entrega resultados que dan cuenta de una positiva percepción de la movilidad social intergeneracional en lo que se refiere a la situación laboral, la calidad de la vivienda, el nivel de ingresos y la vida familiar. Sin embargo, se aprecia una gran desconfianza en las opciones de progreso para quienes tienen menos posibilidades.

En un completo módulo de preguntas sobre violencia se verifica un porcentaje bajo de personas que se considera víctima de agresiones físicas o verbales y en su mayoría estas no responden a expresiones por motivos de raza, condición física o sexual. Hay, sin embargo, episodios de violencia intrafamiliar que no son considerados delito o no se les otorga gravedad. El vandalismo, el saqueo y la agresión a la policía despiertan rechazo, pero hay cierta justificación a favor de quienes toman la justicia en sus manos. De igual forma, la violencia social y el uso de la fuerza son aceptadas por parte de la ciudadanía, pero de manera muy condicionada.

La Encuesta Nacional Bicentenario 2012 nos devela así las complejidades de una sociedad que enfrenta un dispar camino hacia el desarrollo, en el cual se reconoce una amplia satisfacción en el plano particular, pero subsiste una profunda desconfianza para resolver como país los problemas en el ámbito social. El desafío que nos plantea este estudio apunta a la necesidad de reforzar nuestras confianzas sociales, proyectando hacia la sociedad la mirada optimista que se percibe en la realidad personal y familiar.

IGNACIO SÁNCHEZ

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Introducción

CRISTIÁN ZEGERS, director del diario El Mercurio

En siete sucesivas versiones, desde el 2006 en adelante, la Encuesta Nacional Bicentenario de esta Universidad ha cumplido con creces su objetivo de medir, interpretar y divulgar los principales ejes del cambio cultural del país.

Al preguntarse las razones por las cuales este estudio de opinión pública logró consolidarse como un referente principal de estas percepciones, uno necesariamente concluye que no solo la amplitud de su muestra, ni tampoco el rigor y calidad técnica puesta en su realización por Adimark, bastan para explicar aisladamente su ascendiente.

Buscando más razones, pienso que la encuesta, como primera cualidad, ha puesto siempre de manifiesto su independencia. Desde luego, porque no tiene relación con fines electorales y porque no persigue defender o impugnar al gobierno ni a ninguna institución determinada. También está lejos de moverse por visiones o intereses de naturaleza económica o ideológica.

Sus cuestionarios tampoco han planteado temas en función de lo que compete al campo académico o corporativo de la universidad patrocinante. Por el contrario, tan evidente es su independencia que constituye el único estudio de opinión pública que de un modo sistemático mide la adhesión e influencia de la Iglesia Católica —vinculada a la médula de la UC— en uno de sus tiempos coyunturales de mayor dificultad, colocando sus resultados, no siempre promisorios para esta, a disposición del debate nacional.

Una segunda explicación tiene que ver con que la encuesta indaga en temas complejos, como creencias espirituales y sentimientos valóricos. Corrientemente, incluso se llegaba a pensar que este campo de mayor

intimidad no se prestaba para ser dilucidado mediante este tipo de sondeos.

Siguiendo con el ejemplo religioso, es bastante distinto hacer las preguntas elementales del censo —confesiones de sí o de no sobre la convicción religiosa primaria— a extender una gama mucho más compleja de interrogantes: frecuencias exactas de prácticas religiosas, conversaciones con otros sobre la muerte, aspiraciones de vida religiosa o de educación en colegios de una determinada confesión, lectura de la Biblia y hasta valor asignado a cada sacramento en particular.

Bien sabemos que solo visto el fenómeno religioso en toda su riqueza y complejidad es cuando de verdad aparecen los contrastes y situaciones paradójicas —signos a la vez de vitalidad y declinación— que él presenta en Chile. Y lo mismo podríamos sostener de la mayoría de los capítulos de la encuesta. De ahí su influencia, por ejemplo, en áreas tan poco exploradas como la postura de los chilenos frente a sus países vecinos.

Un tercer factor explicativo del ascendiente de la encuesta se relaciona con el respeto en la formulación de los cuestionarios. Ciertamente se aprecia el cuidado de rehuir cualquier resultado sensacionalista y meramente coyuntural. A este estudio, por el contrario, le interesa la percepción de principios —la condenación a la violencia de grupos, por ejemplo— trascendentes para todos en la sociedad actual, pero no es su propósito ponerles un apellidado que desnaturalizaría su condición de supuestos sociales de validez transversal.

En efecto, no se pregunta por la manifestación tal o cual —aunque esté impresa a fuego en la memoria colectiva, por el vandalismo que provocó— sino que se interroga

acerca del juicio de gravedad que cada cual confiere a “un grupo de manifestantes (que) bloquea un camino o construye una barricada como medida de presión ante demandas sociales”, o respecto de “un grupo de personas (que) golpea a un delincuente que acaba de cometer un asalto”.

Planteadas de este modo las interrogantes, la conclusión que otorga una terminante y abrumadora condenación de gravedad a la primera circunstancia, se muestra algo más benévola, sin dejar de tener por ella un rechazo mayoritario, respecto al delincuente golpeado después de cometer un asalto, principio anti violencia que vemos relajado y que claramente orienta sobre lo que debemos insistir o derechamente corregir.

Como última razón desearía mencionar el foco permanente que ha tenido este estudio —sabio foco, por lo demás— para saber combinar las básicas percepciones de contingencia con las preguntas más recurrentes que se relacionan con el progreso y grados de satisfacción y felicidad. En esta oportunidad, y solo aludimos a las interrogantes resueltas en la encuesta del 2012, tenemos así una primera base para saber a qué atenemos respecto, por ejemplo, a optimismo sobre movilidad so-

cial individual; posibilidades de que cualquier persona inicie un negocio independiente o salga de la pobreza; grados de felicidad en dimensión individual y social; medición de satisfacción de las relaciones con los hijos, amigos y vecinos, etc.

Con sus inequívocos méritos, también algunos resultados del 2012, como la disposición a votar en los últimos comicios municipales, nos advierten sobre la reserva con que debemos asumir predicciones de conductas ciudadanas que ya no resultan tan evidentes de establecer, por ejemplo, luego de la implantación del voto voluntario y la inscripción automática.

El valor de la Encuesta Nacional Bicentenario, digámoslo una vez más, procede del trabajo interdisciplinario de los académicos de una gran universidad, sumado a la técnica de una solvente empresa especializada. La colaboración de El Mercurio a esta labor, como medio de comunicación, y de Canal 13, es abrir las puertas de sus conclusiones al debate franco y transparente de las cuestiones probablemente más medulares de la sociedad actual. Por esto, El Mercurio apoya resueltamente la encuesta y confía en el efecto de este instrumento.

Introducción

NICOLÁS EYZAGUIRRE, presidente del directorio de Canal 13

Esta Encuesta Nacional Bicentenario es un esfuerzo entre instituciones diversas que tienen en común una preocupación esencial por el país en que vivimos, el de hoy, el de ayer y el de siempre. Una preocupación que es parte de nuestra misión.

La Pontificia Universidad Católica de Chile y Adimark GfK han sido un referente ineludible a la hora de medir y testear la opinión pública para iluminar así el camino del desarrollo. Misión que compartimos y que es una preocupación constante por darle voz a lo que suele ser callado. Universidad y Canal abiertos al presente, buscando la continuidad con el ayer, construyendo entre todos una visión de Chile que sobreviva al tiempo y sus vaivenes.

Esta no es una encuesta más. Más que datos o cifras tenemos la voz de un país que ya no puede reconocerse, ni reducirse a una sola imagen. Un rostro de varias facetas, contradictorias para el que no tiene la paciencia y la valentía de mirar el cuadro entero.

Es eso lo que nos ofrece esta encuesta: el cuadro entero. Un cuadro que la sola intuición voluntarista no puede abarcar. Un cuadro irreductible, diverso, vivo como pocas veces en su historia. Un aporte valiosísimo para todos los que desarrollamos nuestra labor en público, los que tratamos de interpretar a ese público que sabemos, al leer los datos, es cualquier cosa menos una masa informe que no sabe lo que quiere.

País desconfiado que confía como nunca en sí mismo, país liberal y profundamente conservador, país dividido que se siente unido por profundos ejes, país individualista que aún busca respuestas colectivas, el Chile del Bicentenario. Un país que ha pasado por experimentos sociales y políticos contradictorios, que ha crecido, que quiere seguir creciendo, pero que pide hacerlo en armo-

nía. Con el medio ambiente, con su historia, con su propia comunidad básica: la familia, el barrio, los amigos.

Es un país que no tiene miedo a pedir, a exigir, a querer. Es quizás lo primero que salta a la vista en esta encuesta: el comienzo de las exigencias. Un país que no busca ya en las certezas del pasado esa unidad que anhela. Que encuentra en los lazos privados ese espacio en que puede ejercer con plenitud su derecho a decidir.

Este estudio nos permite comprender a cabalidad la amplitud de esa necesidad. *En sueño empieza la responsabilidad*, escribió un famoso poeta estadounidense. Eso también es cierto en el caso chileno. En el sueño de una vida mejor, de más prosperidad, se vislumbran las responsabilidades. Y la encuesta muestra un país consciente de esta responsabilidad. Deseoso de encontrar una elite capaz de encarnar ese sentido de la responsabilidad.

Hoy podemos acercarnos y entender mejor las aspiraciones y necesidades de la población. ¿Esto nos hará comprendernos, comunicarnos, conocernos mejor? Esta encuesta apuesta a saber qué decimos cuando decimos “los chilenos”.

La televisión entra en las casas, es parte de la privacidad de quienes la miran. Para los que trabajamos en ella, este estudio es más que una herramienta, es un apoyo esencial. Somos un medio que dialoga, que debe escuchar tanto o más de lo que habla. No comunicamos en el vacío, lo hacemos desde un país y hacia un país. Somos parte de los sueños, necesidades, rabias y amores de los que nos miran, de los que se miran en nosotros.

Pocas veces tenemos el tiempo para detenernos y ver entera todas las caras de la luna. Es lo que esta encuesta logra: sintonizarnos con los que nos sintonizan, saber y aprender a qué país le hablamos.

Las tensiones del desarrollo social en Chile hoy: movilidad individual y frustración social

IGNACIO IRARRÁZVAL, director del Centro de Políticas Públicas UC
MARÍA IGNACIA ARTEAGA, investigadora asociada al Centro de Políticas Públicas UC

Introducción

Desde la perspectiva internacional, frecuentemente se ha considerado a Chile como un país bien posicionado en relación a sus pares latinoamericanos y también mundialmente. Sin embargo, estos resultados no han permitido evitar el descontento ciudadano del cual los chilenos han sido testigos durante los últimos años. El objetivo de esta presentación es analizar una serie de resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012 respecto de algunas dimensiones que permiten dar cuenta de la percepción sobre movilidad individual y desarrollo que tienen los chilenos como fenómenos paralelos y a ratos contradictorios. Además, en la medida en que la disponibilidad de datos lo permita, se busca poner estos resultados en relación a una mirada longitudinal. De esta forma, en el documento se pretende relevar algunas hipótesis que puedan enriquecer la discusión en torno al desarrollo social de Chile hoy, considerando que estas pueden proporcionar un termómetro de los logros que hemos alcanzado y de los desafíos aún pendientes en cuanto a desarrollo social.

Reflexiones sobre el desarrollo social y la percepción subjetiva de este en Chile

Desde la perspectiva internacional, frecuentemente se ha evaluado a Chile como un país bien posicionado en relación a sus pares latinoamericanos y también mundialmente. En 20 años ha logrado reducir su tasa de pobreza en 26 puntos porcentuales (del 40% en 1990 al 14% en 2011) y esto lo ha logrado con mayor celeridad que el resto de América Latina, disminuyendo incluso el nivel de desigualdad en los ingresos (Cepal, 2011). Además, presenta un Índice de Desarrollo Humano muy

alto, que lo califica como un país que ofrece condiciones mínimas de calidad de vida y respeto a los derechos humanos, considerando los logros en materias de educación, salud y riqueza. De hecho, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se posiciona 44 entre las 187 naciones analizadas, compañero de grupo de los países de Europa occidental y oriental, América del Norte y los países oceánicos de Australia y Nueva Zelanda (PNUD, 2011). En la misma línea, los resultados de la prueba internacional PISA en educación muestran que los estudiantes chilenos (y el sistema educativo) se ubican en el lugar 44 de 69 países en que se aplica la medición. Ahora, a nivel regional, obtuvo el primer lugar indiscutido en los resultados de Lenguaje y Ciencias en América Latina, mientras que compartió el podio en matemáticas con México y Uruguay (Mineduc, 2011). Por último, desde la perspectiva económica, ofrece altos niveles de prosperidad para sus habitantes a corto y mediano plazo, al considerar las instituciones, políticas y factores que se entretujan para utilizar productivamente los recursos disponibles.

Desde este punto de vista hay al menos tres datos relevantes que muestran la solidez de la economía chilena. El primero es que al año 2012 era la segunda nación más competitiva de América Latina, ubicándose en el lugar 33 de 144 en el Índice de Competitividad Global que realiza el Foro Económico Mundial (WEF, 2012). El segundo es que la comunidad académica internacional lo evalúa como el país mejor preparado de América Latina para enfrentar una crisis económica global, dada su capacidad para crecer económicamente a partir de fuentes domésticas (Rojas-Suárez, 2009). El último dato es que la agencia clasificadora de riesgo Standard and Poor's mejoró recientemente su calificación crediticia en

categoría doble A, similar a la obtenida por Japón y Taiwán, respaldando su manejo económico y política fiscal.

Sin embargo, estas mediciones no han permitido evitar el descontento ciudadano del cual los chilenos han sido testigos durante los últimos años. Los jóvenes cada vez más se alejan de las relaciones formales con las instituciones políticas y religiosas, en lo que se ha llamado académicamente “crisis de representación” (Corvalán, 2012; Valenzuela, 2011). Los medios de comunicación repiten la demanda de los estudiantes secundarios y universitarios señalando que el modelo educativo está en crisis. Las calles se han inundado de personas que se movilizan en busca del rechazo a proyectos ambientalmente perjudiciales. Además, ya se reconoce que Chile es el país más desigual de la OECD respecto a su distribución de ingresos y en el que menor confianza interpersonal declaran sus habitantes entre sus pares (OECD, 2011).

De esta forma, se constata un desajuste entre la dimensión objetiva del desarrollo social respecto de su correlato subjetivo o perceptual. Dentro de la revisión de la literatura reciente acerca de este desajuste que se produciría en Chile, se abordarán brevemente algunos estudios que van de una perspectiva más económica a otra más culturalista.

En primer lugar, en el estudio *Growing pains in Latin America* (2009), connotados académicos latinoamericanos realizan una aproximación empírica al crecimiento económico de diversos países, excluyendo a Chile. En él se revisan los fundamentos para un crecimiento económico sustentable de Latinoamérica, una región en desarrollo que se caracteriza por ser la más abierta en los aspectos financieros (pero no así comercialmente), la más democrática en sus instituciones, y la más desigual social y económicamente hablando. Los fundamentos que los autores consideran analíticamente para entender el crecimiento económico son los derechos de propiedad, igualdad de oportunidades y competencia económica y política (en el plano institucional); y la estabilidad macroeconómica y una distribución compartida de los beneficios del crecimiento (en el plano económico).

En relación a la desigualdad social y económica, los autores discuten el argumento del descontento ciudadano. Desde una mirada general, sostienen que la ausencia de apoyo político y económico de la comunidad al impulso de reformas centradas en el mercado se debería a la falta de una distribución compartida de los beneficios del crecimiento, en la medida en que estos no alcanzarían a ser igualmente percibidos por los sectores bajos y medios.

Así, esta desigualdad sería un factor por el cual los ciudadanos estarían descontentos con el modelo económico.

En segundo lugar, Juan Carlos Castillo, del Centro Mide UC, señala el contraste entre la desigualdad económica objetiva y subjetiva en Chile y la implicancia de que esta percepción genere presiones redistributivas en el país. En este sentido, Castillo (2012) discute la “tesis del espejo”, o correspondencia entre desigualdad objetiva y percepción de desigualdad, a través del análisis de la desigualdad salarial en Chile. El autor demuestra estadísticamente la existencia de sesgos perceptuales fuertemente explicados por el nivel educativo y de ingresos de un individuo. De esta forma, sostiene que personas más educadas frecuentemente perciben mayor desigualdad salarial entre diversas ocupaciones, en comparación con las personas con menor nivel económico, lo cual se replicaría en el análisis de la influencia de los ingresos. Además, desde una mirada comparada, fundamenta cómo en Chile la percepción de desigualdad salarial es mayor que la desigualdad económica real y en qué medida la percepción de desigualdad salarial está más estratificada según el estatus del individuo que en el resto de los países.

En tercer lugar, desde una perspectiva culturalista se encuentra el ya clásico estudio del politólogo Ronald Inglehart (1998) acerca de la transición desde los valores materialistas a los post-materialistas, la cual se genera en el despliegue histórico de los procesos de modernización. En su obra *Modernización y posmodernización: el cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*, este autor analiza teórica y estadísticamente cómo las sociedades que se modernizan tienden a reproducir determinadas formas institucionales y a implantar ciertos valores.

Enmarcado en las teorías de modernización, Inglehart ofrece una mirada histórica que sostiene que cuando las sociedades asumen procesos de modernización se produce un doble movimiento: el síndrome moderno y el síndrome postmoderno. El síndrome moderno es el proceso mediante el cual el crecimiento socioeconómico reduce la inseguridad de la escasez. Así, lo primero que haría la modernización es asegurar las valoraciones materialistas, legitimando la opción histórica de un desarrollo económico. Para esto, generaría una estructura institucional específica marcada por los fenómenos de industrialización, urbanización, especialización y masificación del acceso a la educación. El síndrome postmoderno, en tanto, es la transformación intergeneracional de los valores, en la medida en que las generaciones más jóvenes han sido socializadas en la abundancia que es producto

del crecimiento socioeconómico. Así, lo segundo que haría la modernización es generar un cambio desde valores materialistas hacia valores postmaterialistas: valores de la autoexpresión que afirman como un bien social fundamental la promoción de la creatividad, la realización personal, las libertades políticas civiles y, por sobre todo, la libertad de elección y la autonomía para tomar decisiones.

En esta línea, en cuarto lugar está el estudio *Una mirada desde el estrato bajo: percepciones y expectativas de ascenso social* que los investigadores del Centro de Políticas Públicas UC Ignacio Irarrázaval y María de los Ángeles Morandé (2008), realizan. En el documento sostienen que se han acortado las distancias entre el estrato bajo y el estrato medio en Chile. Para explicarlo ilustran dos factores que se asociarían a este cambio: en términos materiales, se constata el mejoramiento de las condiciones generales de vida y, en términos culturales, ocurriría una mayor identificación en el estrato bajo con los valores tradicionalmente adjudicados a los sectores medios. En este sentido, los autores corroboran la idea de que el mayor acceso al bienestar material y social estarían ligados a cambios en la manera de pensar del estrato bajo, pudiendo así establecer la hipótesis de que el estrato bajo en Chile se estaría “medianizando”, es decir, adoptando valores, actitudes y prácticas comúnmente atribuidas al estrato medio.

Por último, el Informe Desarrollo Humano en Chile del PNUD (2011) explica el desajuste en cuestión a partir del concepto de bienestar subjetivo, el cual busca posicionar la subjetividad¹ del individuo al centro de la pregunta por el desarrollo. En esta línea, el informe enfatiza la coherencia de tener una visión crítica de la sociedad, sobre todo respecto a la desigualdad, a pesar de que los individuos presenten valoraciones positivas sobre su propia vida. A grandes rasgos, la explicación de este desajuste refiere a la pérdida de importancia de las variables estrictamente técnicas o económicas para entender las demandas sociales, de modo que el malestar subjetivo con la sociedad descansaría en la desigual distribución de capacidades que pondría una cortapisa al desarrollo de los proyectos de vida. En otras palabras, retomando la discusión del Nobel de Economía Amartya Sen, el desajuste se comprendería desde el enfoque en las capacidades. El centro de esta aproximación se encuentra en aquellas actividades que los individuos son capaces de hacer, o logros que son capaces de conseguir de acuerdo a sus propios objetivos, considerando

los siguientes elementos: la libertad real de elección, la habilidad de transformar recursos disponibles en actividades valiosas para el individuo y la distribución de oportunidades en una sociedad. Así, en último término las capacidades denotan la oportunidad y habilidad de una persona de generar resultados valiosos, tomando en cuenta características personales relevantes y factores externos (Sen & Nausbaum, 1996).

En consideración de la revisión preliminar, en esta oportunidad se pretende otorgar una breve mirada en torno al contraste que se produce entre las percepciones que tienen los chilenos sobre aspectos objetivos versus aspectos subjetivos del desarrollo social. Esto, para enriquecer la discusión en torno al desarrollo social de Chile hoy, confeccionando un panorama tanto de los logros que se han alcanzado en materia política, económica y social, como también de los desafíos aún pendientes en la política pública para así proveer oportunidades equitativas de bienestar.

Ejes de análisis y objetivos

Con el interés de analizar el contraste que se produce entre las percepciones que tienen los individuos sobre aspectos objetivos versus aspectos subjetivos del desarrollo social, a los dos conceptos que guían esta discusión —percepción de movilidad individual y percepción de desarrollo social— se añadirán algunas consideraciones respecto a los conceptos de satisfacción, posición política y actitud pro mercado o pro Estado (como indicador del posicionamiento del individuo en la economía política).

Por un lado, se entenderá por percepción de movilidad individual la evaluación que hacen las personas de su situación actual de vida respecto a la situación que tuvieron sus padres y la que creen que tendrán sus hijos a la edad del encuestado. La percepción de movilidad individual analiza la percepción de factores materiales e inmateriales de la situación del individuo: por una parte, se encuentran las dimensiones de vivienda, trabajo e ingresos y, por otra, las dimensiones de disponibilidad de tiempo libre y calidad de la vida familiar.

En tanto, se entenderá por percepción de desarrollo social la evaluación que realizan los encuestados respecto de dos elementos. El primero encuentra relación con la percepción que tiene un individuo sobre las probabilidades de ascender socialmente en Chile considerando

1 Se entiende por subjetividad el espacio y el proceso en que los individuos construyen una imagen de sí, de los otros y del mundo en el contexto de sus experiencias sociales.

diversos aspectos, tales como aumentar los ingresos, entrar a la universidad, obtener una vivienda propia, o prosperar en sus negocios. El segundo se refiere a la percepción que tiene un individuo respecto a la posibilidad del país de cumplir en un plazo de diez años una serie de metas que apuntan a la superación de la pobreza, el desarrollo, la reconciliación, la calidad de la educación, la protección del medio ambiente y la disminución de la desigualdad de ingresos.

A continuación se discutirán tres tensiones presentes en el modelo de desarrollo chileno a partir del material empírico disponible y de las tres distinciones analíticas revisadas en la literatura. A saber: (1) la percepción subjetiva del desarrollo social versus su correlato objetivo, en diálogo con Castillo, (2) la percepción de bienestar individual versus la percepción de bienestar social recuperado del PNUD y (3) la distinción realizada por Inglehart entre valores materialistas y post materialistas. De este modo, se buscará concluir con una reflexión en torno a una temática sumamente en boga: ¿sirven los logros objetivos para la percepción de desarrollo social? y ¿qué nos dicen los datos respecto a la alternativa de cambiar el modelo de desarrollo chileno?

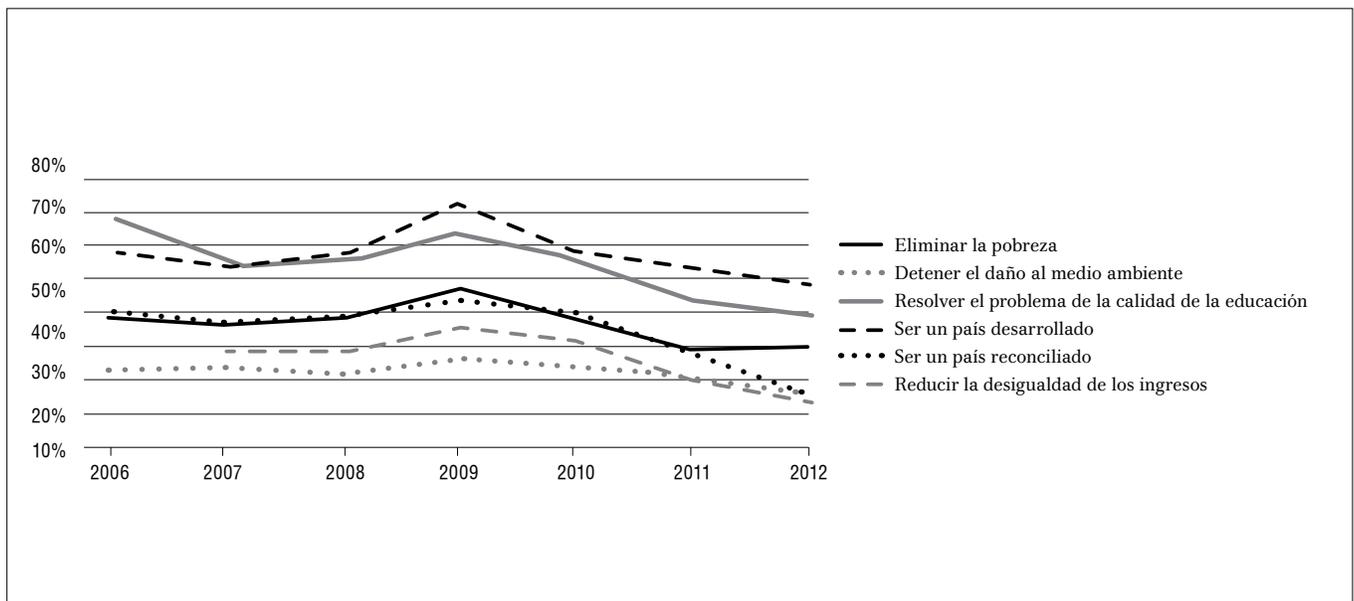
Tensiones en el modelo de desarrollo

1. El desarrollo social objetivo y su percepción subjetiva

A partir de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012 se observa que a lo largo de los años han disminuido sistemáticamente las expectativas de futuro acerca de diferentes metas que podría lograr Chile en un plazo de 10 años. Los chilenos vemos con menos confianza que antes la capacidad del país para alcanzar el desarrollo, eliminar la pobreza o solucionar el problema de la educación, por ejemplo. Ahora bien, las metas más desafiantes estarían en lograr la reconciliación, reducir la desigualdad de los ingresos y detener el daño al medio ambiente, tres objetivos que gozan de poca salud hoy según la percepción de los chilenos, como se observa en el Gráfico 1.

Ahora, estos resultados perceptuales contrastan con indicadores duros de la política pública, como lo que destacan los logros en materia de reducción de pobreza y ampliación de la cobertura en las políticas de educación y vivienda en el tiempo. Para ilustrar este contraste se presentarán algunos indicadores de la Encuesta CASEN con aquellos disponibles en la Encuesta Nacional Bicentenario. En primer lugar, se observa que en materia de po-

Gráfico 1 | Pensando en un plazo de 10 años, ¿usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país? (% se habrá alcanzado + se habrá avanzado)



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Bicentenario.

breza la tasa de personas pobres en Chile ha disminuido de 20,2% a 14,4% desde el año 2000 al 2011 (CASEN, 2012). Sin embargo, la percepción positiva de que un pobre pueda salir de la pobreza ha descendido con algunos altibajos desde el 43% en 2006 hasta el 35% en 2012, como lo presenta la Encuesta Nacional Bicentenario.

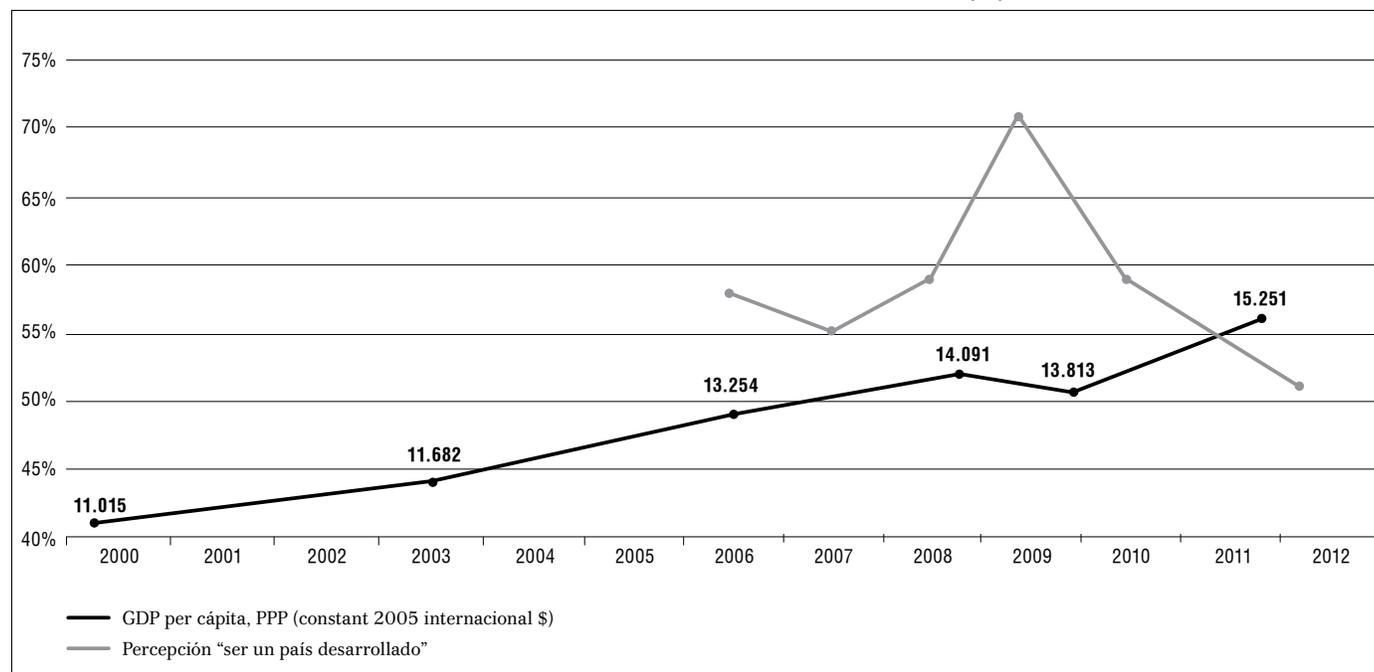
En segundo lugar se encuentra la alta cobertura de la política de vivienda, considerando que el porcentaje de propietarios en Chile se ha mantenido relativamente constante entre el 70% y el 66% (CASEN, 2012). Esto contrasta con el descenso patente de la percepción de las personas de que cualquier trabajador pueda obtener una vivienda: en solo cuatro años la “probabilidad alta o muy alta” de alcanzar esta meta ha bajado sistemáticamente desde el 56% en 2009 hasta el 38% en 2012.

En tercer lugar es posible discutir el contraste en materia educacional: mientras los chilenos declaran cada vez con menos frecuencia que es “bastante probable” que un joven inteligente pero sin recursos entre a la universidad (desde el 54% en 2009 hasta el 37% en 2012), la cobertura de educación superior para el primer quintil de ingreso ha subido sin retrocesos, desde el 7% en 2000 hasta el 22% en 2011, valor que es incluso mayor al del quinto quintil el año 2000.

En este sentido, los indicadores que avalan los beneficios y oportunidades generados por el sostenido crecimiento económico que Chile ha experimentado se contraponen con la percepción subjetiva acerca de la generación de estas oportunidades. Un último contraste puede observarse en el siguiente gráfico.

En el Gráfico 2 se hace evidente la falta de convergencia o distorsión entre la percepción de desarrollo y una medida empírica y mundialmente compartida de este: el producto interno bruto per cápita. La baja en la percepción en torno a la capacidad de Chile de lograr el desarrollo no solo ocurrió contemporáneamente a la caída del ingreso per cápita sufrido entre 2008 y 2010, sino que se mantuvo la perspectiva a pesar del repunte del indicador económico. Ahora bien, siguiendo a Castillo (2012), la tensión que refleja este gráfico no corresponde unívocamente a una distorsión en la percepción, sino que en la medida en que posee ciertas consistencias entre individuos y también en el tiempo, corresponde hablar de un sesgo perceptual (Castillo, 2012: 5). En este caso significa que existen importantes diferencias en la percepción de cumplimiento de metas del país según nivel educativo. Esto se ilustra al agrupar las seis metas indagadas en un índice simple que luego se observa se-

Gráfico 2 | Contraste entre respuesta “se habrá alcanzado + se habrá avanzado” respecto a la meta de “ser un país desarrollado” y PIB per cápita en Chile (%)



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Bicentenario y Banco Central.

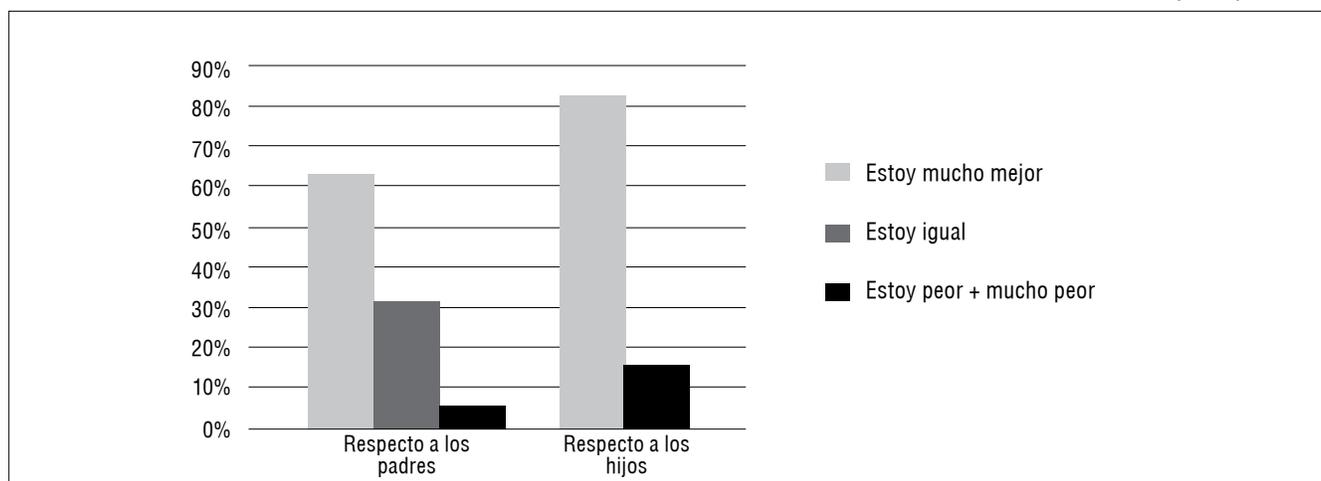
gún sea el nivel educativo del individuo. A partir de este ejercicio se constata que a mayor educación, mayor optimismo habría respecto de la capacidad que tiene Chile de cumplir esa serie de metas, situación que disminuiría de manera progresiva hasta llegar a la población sin estudios. Así, mientras las personas que cursan o han cursado estudios de postgrado declaran el 46% de las veces que las metas se habrán alcanzado en un plazo de 10 años, las personas sin estudios realizan la misma aseveración solo el 28% de las veces.

De esta manera, tomando como punto de partida la información discutida, es posible sostener tres hipótesis: En primer lugar, que los indicadores de desarrollo social “objetivo” y la percepción “subjetiva” de este no son un reflejo unívoco: los chilenos perciben menos el progreso en el desarrollo social de Chile en comparación con los logros objetivos relativos a la reducción de la pobreza, mejoras en la cobertura de la política de educación y vivienda o retroceso de la desigualdad. En segundo lugar, que los indicadores de desarrollo social “objetivo” y la percepción “subjetiva” de este no son convergentes en el tiempo, en la medida en que año a año los chilenos se vuelven menos optimistas respecto a la posibilidad de cumplir las metas a nivel país, a la vez que progresivamente van mejorando los indicadores en esta materia. En tercer lugar, se sostiene que la percepción “subjetiva” del desarrollo social presenta sesgos perceptuales que fortalecen el escepticismo frente a las capacidades del país, a medida que desciende el nivel educativo de las personas.

2. Percepción de movilidad individual versus frustración social

A partir de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012, se observa que la percepción de movilidad individual de los chilenos es “alta”, si es que se compara la situación del individuo con la de sus padres, y “muy alta”, si es que se compara con la que tendrán sus hijos en relación a su realidad actual. Al evaluar los ámbitos laborales, de seguridad material y tiempo libre, los chilenos declaran tener una “mucho mejor” situación que sus padres a la misma edad, sobre todo en relación a los ámbitos materiales y laborales: trabajo, ingreso y vivienda. Mientras tanto, al comparar su situación con la de sus hijos, la percepción de que sus hijos tendrán una mejor situación es altamente compartida. En el Gráfico 3 se evidencia la significativa percepción de movilidad intergeneracional ascendente de los chilenos en ámbitos tanto materiales como inmateriales (vida familiar y tiempo libre). Sin embargo, las trayectorias de movilidad individual presentarían patrones desiguales. Según la percepción de los chilenos, la mejoría respecto a la situación de los padres es significativamente menor para el estrato bajo, pues mientras el estrato alto declara el 78% de las veces estar mucho mejor que sus padres a su misma edad, y el estrato medio replica eso el 83% de las veces, el estrato bajo declara una mejoría el 70% de las veces. Ahora bien, al cambiar el foco desde las percepciones basadas en la experiencia de los individuos hacia las probabilidades asociadas al ascenso social en abstracto, el panorama denota mayor frustración.

Gráfico 3 | Comparación de la situación actual respecto a la situación de los padres y de los hijos (2012)



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012.

El Gráfico 4 permite observar cómo los individuos perciben bajas probabilidades de que un habitante ascienda socialmente, en especial en lo que refiere a la situación de pobreza y emprendimiento económico.

Por una parte, esta situación de frustración se ha reforzado durante los años, descendiendo las chances optimistas de ascender socialmente cerca de 16 puntos porcentuales entre 2009 y 2012 para cada uno de los ítems inquiridos en la Encuesta Nacional Bicentenario. La excepción está en la probabilidad que tiene “un pobre de salir de la pobreza”, que cayó solo 8 puntos porcentuales en el mismo periodo. Por otra parte, como se ha venido sosteniendo, las probabilidades optimistas de ascender socialmente se encuentran estratificadas, ya que en 2012 el estrato alto declaró poseer una percepción más optimista que el bajo, con una diferencia de 17 puntos porcentuales entre sí.

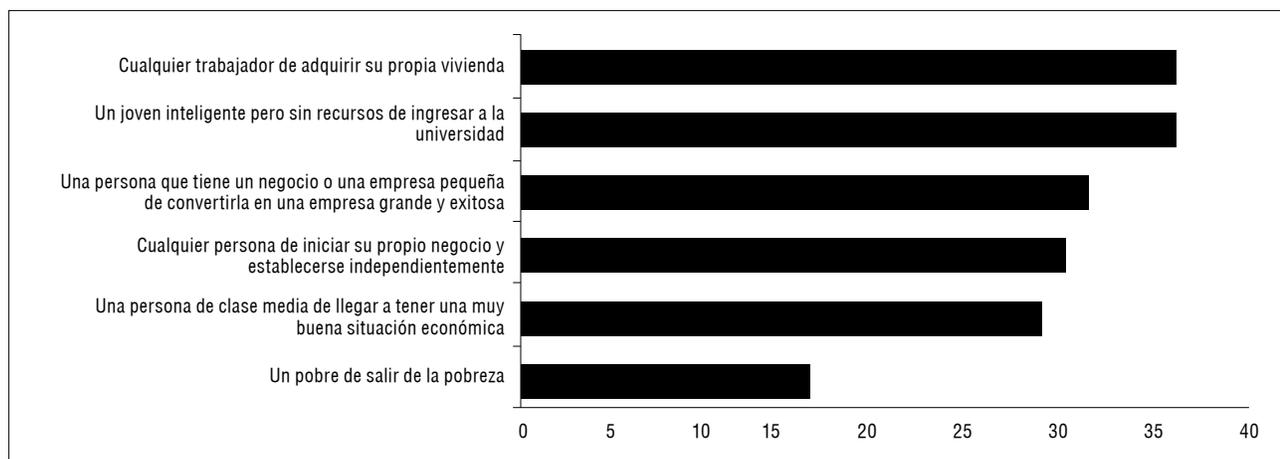
Así, se evidencia el contraste entre un alto nivel de percepción de movilidad individual ascendente y un alto nivel de frustración social respecto a las posibilidades de ascender socialmente. En esta línea, es provechoso retomar la discusión del Informe de Desarrollo Humano en Chile que en 2011 trató el tema del bienestar subjetivo individual y el bienestar subjetivo con la sociedad. Al respecto, el informe sostiene una distorsión similar a la presente en esta discusión, agregando el concepto de subjetividad. Con él se plantea que “así como la subjetividad tiene una dimensión social, histórica y temporal,

también contiene un margen de independencia respecto de las estructuras sociales, por lo que sería un error concebirla como un simple espejo de la sociedad” (PNUD, 2011: 106).

En este sentido, surge la pregunta acerca de cómo explicar la estratificación observada en las percepciones acerca de las probabilidades de ascenso social, recordando que los estratos bajos presentarían mayor frustración que los estratos medios y altos. Quizás la alternativa no sea recurrir al nivel educativo para explicar las diferencias, sino a algo que también se ha transformado en una promesa social más general: la desigualdad. En esta línea, el Panorama Social de América Latina, confeccionado por la Comisión Económica para América Latina, echa luz respecto a una alternativa interesante: preguntarse por la percepción de justicia distributiva y su relación con la confianza en las instituciones. En el documento, se constata una relación estadísticamente significativa entre la percepción de injusticia distributiva y la desconfianza en las instituciones, sosteniendo que ambos indicadores sugieren “la persistencia de un profundo malestar ciudadano con el modo en que funcionan las instituciones y se distribuyen los bienes económicos, sociales y políticos en los países” (CEPAL, 2012: 8).

Caben aquí tres datos interesantes en torno a la situación en Chile. En primer lugar, en los indicadores de cohesión social de la OECD se presenta a Chile como el país con menor confianza interpersonal de los países

Gráfico 4 | Probabilidad de ascenso social (2012)
(% probabilidad “alta” + “muy alta”)



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012.

miembros, índice que se relaciona estadísticamente con una alta desigualdad en los ingresos (OECD, 2011). En segundo lugar, la Encuesta Nacional Bicentenario expone con claridad el bajo nivel de confianza en las instituciones que declaran los chilenos. En materia de confianza institucional, los partidos políticos y parlamentarios han mantenido un índice en torno al 4% desde 2006 a la fecha en Chile, mientras que la confianza ciudadana ha bajado en relación al gobierno cerca de 15 puntos porcentuales durante el mismo periodo. Estudios como el de la CEPAL (2012) han demostrado que la confianza en las instituciones se relaciona estadísticamente con el nivel de desigualdad en los ingresos. En este sentido, el estudio señala que Chile es el país pionero de América Latina en percepción de injusticia distributiva, pues el 94% sostiene que la distribución de los ingresos en Chile es “injusta” o “muy injusta”, situación que se ha consolidado desde años anteriores, aumentando en 55% de las veces desde la percepción que los chilenos declaraban en 2002 (CEPAL, 2012).

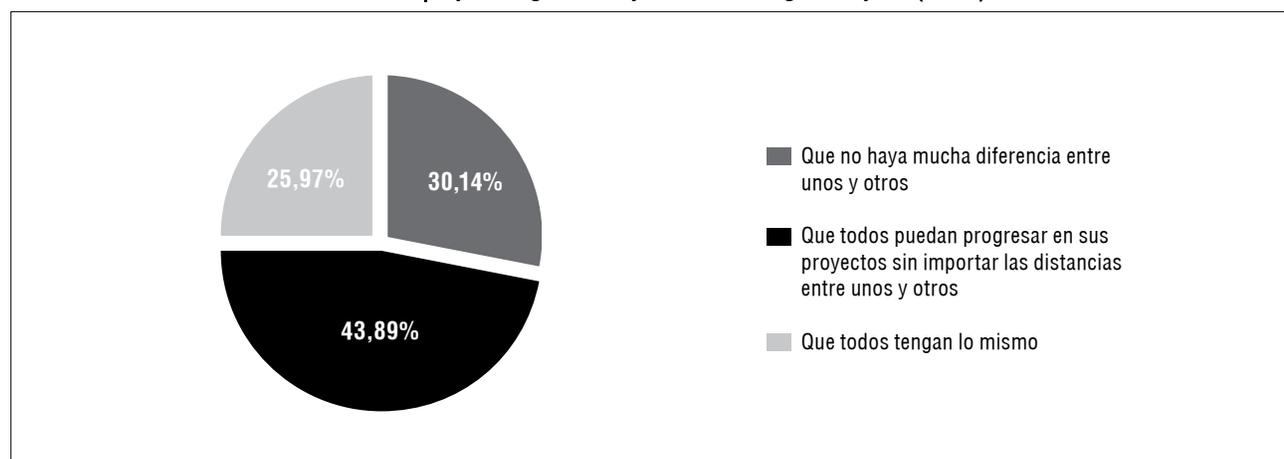
Además, en un plano más cualitativo, es sugerente reflexionar que quienes han experimentado con mayor fuerza las dificultades de ascender socialmente tengan una peor percepción sobre las posibilidades reales de que el país cumpla sus metas acerca de la eliminación de la pobreza, la reconciliación y el desarrollo económico, por decir algunos, y, a la vez, declaren un nivel de frustración mayor respecto de las chances de ascen-

der socialmente. En este sentido, la experimentación de oportunidades de bienestar desiguales sería mejor explicación ante la estratificación de las percepciones de movilidad individual y desarrollo social que la variable de nivel educativo.

Se vuelve oportuno observar entonces las preferencias respecto al tipo de igualdad que los chilenos piensan que se debiera conseguir en el país, como lo presenta el Gráfico 5. El 44% declara que esta igualdad debiese versar sobre las oportunidades, es decir, “que todos puedan progresar en sus proyectos sin importar las distancias entre unos y otros”. Esto, en contraposición a las ideas de igualdad referentes a la menor distancia posible entre unos y otros o la eliminación de la desigualdad. Sin embargo, estas alternativas presentan una gran gradiente socioeconómica, pues en el nivel alto se prefiere la igualdad de oportunidades, mientras que en el bajo predomina el criterio de la eliminación de desigualdades a la hora de definir una sociedad justa.

En síntesis, respecto a la tensión entre movilidad individual y frustración social, aparecen tres hipótesis a partir de los resultados obtenidos. En primer lugar, existe un alto nivel de percepción de movilidad intergeneracional, ya que los chilenos observan que su situación actual es mejor a la que vivieron sus padres y confían en que será aún mejor a la que enfrentarán sus hijos. En segundo lugar, tanto la percepción de movilidad individual como

Gráfico 5 | Tipo de igualdad que debiera lograr el país (2012)



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012.

la de desarrollo social están estratificadas, con un sesgo socioeconómico importante: la percepción de movilidad individual y desarrollo social es significativamente menos optimista en el estrato bajo. En tercer lugar, se sugiere que la desigualdad en la distribución de las oportunidades de bienestar puede entenderse como el factor que explique la percepción diferenciada de movilidad individual y desarrollo social en la población.

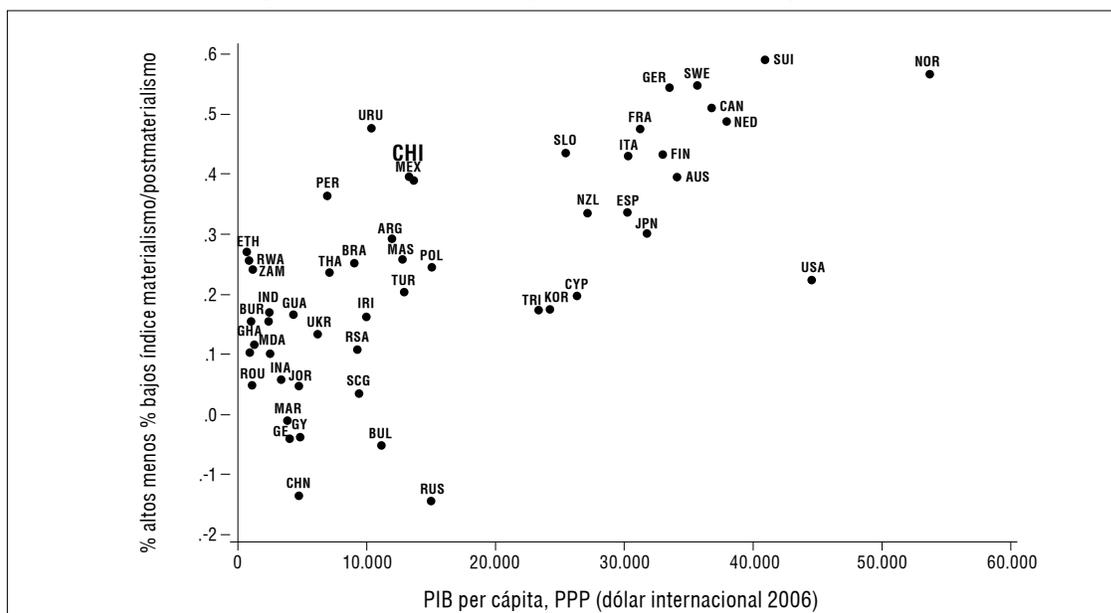
3. Valores materialistas y postmaterialistas en Chile

En este artículo se ha documentado cómo a pesar de la rampante mejoría en indicadores objetivos de desarrollo social, la percepción de los chilenos en torno a la capacidad del país de conseguir ciertas metas, como la reconciliación, la protección al medio ambiente y una distribución de los ingresos más equitativa, ha caído en el tiempo, al igual que la percepción de las probabilidades de ascenso social. En otras palabras, se ha observado cómo los palpables efectos de los esfuerzos realizados mediante iniciativas de política pública no se condicen con la percepción de desarrollo social que tienen los chilenos. Así, es posible decir que Chile ha sido testigo de un cambio en los valores hacia una mayor apreciación de la equidad.

Una pregunta relevante que emerge en esta línea es por qué los indicadores objetivos ya no permiten explicar la frustración social de los chilenos respecto del desarrollo. Se ha discutido la hipótesis de una distorsión entre el desarrollo objetivo y su correlato subjetivo por medio de factores como la experiencia de la desigualdad de oportunidades. Ahora bien, en sí mismo, este escenario puede pensarse como un proceso de cambio en las valoraciones de los chilenos, de modo que lo que fue antes importante para la satisfacción personal y el desarrollo social deja lugar ante la emergencia de otras prioridades. En esta línea, se buscará retomar el argumento planteado en la revisión bibliográfica en torno al cambio valorativo como efecto latente del proceso de modernización de la sociedad chilena.

Ronald Inglehart, en su tesis acerca de la modernización, sostiene que luego de la experimentación de los beneficios del desarrollo económico en una sociedad, las valoraciones de aquellas generaciones socializadas en la abundancia de recursos se modifican, dando paso a valoraciones postmaterialistas, tales como la autoexpresión, la equidad, la creatividad y el respeto al medio ambiente. En este marco, el siguiente gráfico muestra la posición de Chile en el contexto mundial según su nivel de desarrollo económico y la primacía de las valoraciones de sus habitantes.

Gráfico 6 | Desarrollo económico y valores materialistas/posmaterialistas



Fuente: elaboración propia a partir de World Values Survey 2006 y World Bank Data para año 2006.

Por un lado, el gráfico obtenido a partir del procesamiento de la Encuesta Mundial de Valores (2006) presenta a Chile en una posición más postmaterialista que países latinoamericanos, de Europa oriental, Asia y África. Considerando que la escala de postmaterialismo quiere decir que la proporción de personas que declaran prioridades de desarrollo postmaterialistas es mayor que la proporción que declara tener prioridades de desarrollo en torno a ejes materialistas (mantenimiento del orden, lucha contra la delincuencia, crecimiento y estabilidad en la económica, por ejemplo), es posible decir que Chile avanzó precozmente hacia una posición postmaterialista en relación a sus pares en el desarrollo económico, medido como ingreso per cápita a precio de dólar internacional para el mismo año de la Encuesta Mundial de Valores.

Por otro lado, en relación a los datos disponibles en la Encuesta Nacional Bicentenario, es posible sostener que los chilenos promovemos (y exigimos) el valor de la participación en relación a la toma de decisiones a nivel gubernamental, lo que se observa en la alta demanda por descentralización, en donde se aboga por la autonomía fiscal y política de las regiones entre el 85% y el 90% de las veces, y, en menor medida, autonomía jurídica con el 75% de declaraciones positivas.

Sin embargo, en la medida en que el cambio en las valoraciones no es lineal y está afectado por la contingencia na-

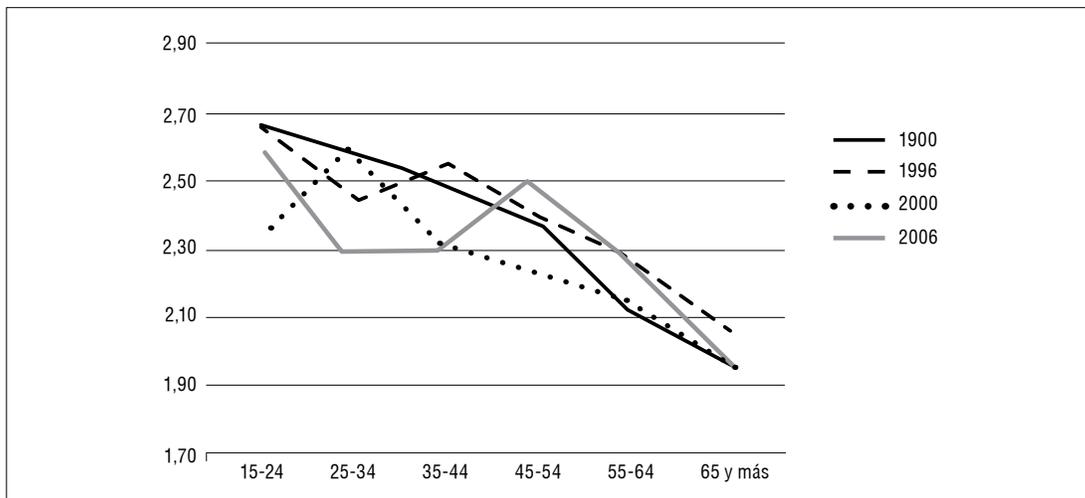
cional, también es predecible observar declaraciones de los chilenos respecto a la necesidad de percibir seguridad económica, lo cual se podría relacionar tanto a la estabilidad laboral como al nivel de ingresos de los individuos.

Ahora, a pesar de ese resabio, existe una diferencia generacional en relación al cambio de valores que hace que las personas más jóvenes declaren un mayor número de prioridades postmaterialistas, como lo presenta el siguiente gráfico, procesado a partir de la Encuesta Mundial de Valores para Chile.

En él, en una escala de 0 a 5, donde cero es materialista y 5 es postmaterialista, se observa que los valores como la autoexpresión son mejor representados en la juventud para luego decrecer de forma irregular hasta llegar a la tercera edad.

En esta línea, a pesar de la baja disponibilidad de información, es posible hipotetizar que un factor relativamente importante para dar cuenta de la frustración social se encuentra en la tensión en el cambio de los valores en Chile, en donde producto de un desarrollo económico sostenido las generaciones van modificando las valoraciones respecto a las prioridades que debiera perseguir el país. De esta manera, se demanda mayor participación en la toma de decisiones y mayor equidad en las oportunidades de desarrollo, sin olvidar la preocupación por aspectos materiales, como la seguridad económica.

Gráfico 7 | Índice materialismo/postmaterialismo: Diferencia generacional en el tiempo



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Mundial de Valores para Chile.

Implicancias de política pública

El informe del Banco Mundial titulado *A break with history: fifteen years of inequality reduction in Latin America*, sostiene que Chile ha sido el país pionero en América Latina en reducir la inequidad por medio de la promoción del empleo, a través de la capacitación y participación laboral de nuevos segmentos de la población. Según la perspectiva estadística utilizada en ese informe, Chile logró bajar un 10% de la desigualdad en los ingresos mediante esta política desde 1995 hasta 2010, la cual se ha visto reforzada con el aumento de la cobertura y la calidad en la educación en el tiempo (Banco Mundial, 2011). Ahora bien, además del empleo, existe evidencia acerca del rol que ha tenido la implementación de programas focalizados de transferencias condicionadas en la reducción de la pobreza crónica y la promoción del capital humano de los chilenos (Banco Mundial 2011a; CEPAL; 2012).

En otras materias, a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica es posible observar, durante el periodo de 1990 a 2011, un crecimiento de la cobertura en educación de forma espectacular para el nivel pre-escolar y superior (CASEN, 2011). Estos avances han sido especialmente beneficiosos para el estrato bajo y medio, lo que ha generado una tendencia de movilidad objetiva desde el estrato bajo hacia el medio (Ferreira et al., 2011).

Considerando lo anterior, surge la interrogante de que si persiste una sensación de frustración social entre los chilenos significa que no es relevante que el país aumente las oportunidades objetivas de desarrollo social. En este artículo se propone que una respuesta positiva a esa pregunta sería una afirmación equivocada, ya que el progreso en el alcance y calidad de las políticas públicas es un elemento relevante para el desarrollo social, aunque este no se condiga con su fenómeno perceptual paralelo. Sin embargo, aún es meritorio indagar en la percepción que tienen los chilenos respecto al modelo de desarrollo en Chile, pese a la escasa disponibilidad de datos existente, en la medida en que la reflexión en torno a su evaluación permitiría echar luz sobre aquellos aspectos a mejorar.

Por un lado, la única variable de la Encuesta Nacional Bicentenario para los siete años de estudio que permite una aproximación a la aceptación del modelo de desarrollo —o posicionamiento en la economía política— inquiriere sobre la fuente de provisión del bienestar de las personas, en la que, de una escala de 1 a 10, donde 1 es

“mercado” y 10 es “Estado”, se le pide al individuo que se posicione. Si se entiende que el bienestar es la promesa social del modelo de desarrollo, los resultados de esta pregunta pueden interpretarse de la siguiente forma: a pesar de los cambios de gobierno y la contingencia nacional, en los últimos siete años el posicionamiento de los chilenos en la economía política se ha mantenido sin mayores cambios: el 41% de la población se posiciona en torno al mercado mientras que el 29% lo hace en torno al Estado como fuente de provisión de bienestar. En este sentido, precaviendo el limitado alcance de este resultado, dada la falta de datos, un primer elemento a considerar es la estabilidad de la aceptación del modelo, pues ante cambios externos, que modificarían en alguna medida el modelo de desarrollo, se mantiene una aceptación general en torno a un modelo centrado en el mercado.

Por otro lado, retomando los resultados discutidos más arriba, se observa que los logros en las trayectorias de movilidad individual son indiferentes al indicador que se aproxima a la aceptación del modelo, pero no así para el caso de la frustración social. En otras palabras, el posicionamiento en la economía política no es discriminante en la percepción de movilidad individual en la medida que esta es alta tanto para aquellos “pro Estado” como para aquellos “pro mercado”. Esto se condice con un alto nivel de satisfacción con la vida, ya que el 81% señala estar “bastante feliz” o “muy feliz” respecto a su vida en general. Sin embargo, el posicionamiento en la economía política sí guarda relación con la sensación de frustración social respecto a las probabilidades de ascenso social, en tanto los chilenos “pro mercado” son significativamente más optimistas respecto a las posibilidades de ascenso social que aquellos “pro Estado”, manteniendo esta diferencia en el tiempo. En este sentido, es probable que la necesidad de mejorar el modelo pase por entender la igualdad que Chile necesita y no por modificarlo por completo. Más arriba se dijo que, en su mayoría, los chilenos declaran preferir un criterio de igualdad de oportunidades para progresar en la vida.

Se ha visto, entonces, tres tensiones en el modelo de desarrollo social en Chile: la primera se resume en que la percepción de desarrollo social no es un reflejo de sus avances objetivos realizados mediante la política pública, percepción que además se encuentra estratificada por nivel socioeconómico. La segunda versa sobre la distorsión entre la percepción individual de movilidad y su correlato a nivel social, de modo que a pesar de reconocer trayectorias ascendentes de movilidad individual, cada vez se confía menos en la capacidad del país

de cumplir con sus promesas de desarrollo social. Ante esta tensión se discute como factor explicativo la desigualdad de oportunidades que los chilenos del estrato bajo enfrentan día a día. La tercera tensión, que busca complementar la explicación anterior, aborda la posible transición de los valores materialistas hacia valores postmaterialistas que estaría dando lugar a una nueva fase de prioridades y expectativas.

En definitiva, las tensiones en el modelo de desarrollo en Chile y sus contrastes perceptuales y objetivos pueden entenderse metafóricamente con la imagen de la adolescencia: si Chile fuera una persona, la fase que está enfrentando en relación al desarrollo social es la de la adolescencia, en donde existe una desarmonía en el crecimiento del cuerpo y un creciente proceso de individuación, contestación a la autoridad, hasta una progresiva aceptación de la autoimagen en la personalidad. La desigualdad y la presión por equidad pueden ser vistas como un dolor de crecimiento.

Referencias

- Banco Mundial**, 2011. *A break with history: fifteen years of inequality reduction in Latin America*. Washington: Banco Mundial.
- Castillo, J.**, 2012. *Contrastes entre la desigualdad objetiva y subjetiva en Chile*. Santiago: Centro de Políticas Públicas UC.
- CEPAL**, 2011. Pobreza, desigualdad y percepciones sobre el mundo del trabajo. En: *Panorama social de América Latina*. Santiago: Organización de las Naciones Unidas.
- CEPAL**, 2012. *Panorama social de América Latina*. Santiago: Organización de las Naciones Unidas.
- Corvalán, A. & Cox A.**, 2012. Crisis de representación en Chile. *Mensaje* 607:6-9, Santiago, Chile.
- Ferreira, F., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L.**, 2011. *Economic mobility and the rise of the Latin American middle class*. Washington: Banco Mundial.
- Inglehart, R.**, 1998. *Modernización y posmodernización: el cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Irrarrazaval, I. & Morandé, M.A.**, 2008. Una mirada desde el estrato bajo: percepciones y expectativas de ascenso social. En: *Pobreza: Ideas para superarla: Un homenaje a Miguel Kast R.* Santiago: Fundación Libertad y Desarrollo.
- Ministerio de Desarrollo Social, División Social, Encuesta CASEN**: www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/observatorio/casen/.
- Ministerio de Educación**, 2011. *Resultados de Chile en TIMSS 2011: Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias*. Santiago. Presentación disponible en: <http://www.educacion2020.cl/noticia/chile-sube-en-prueba-timss-pero-sigue-bajo-promedio-internacional>.
- OECD**, 2011. Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators: www.oecd.org/els/social/indicators/SAG.
- PNUD**, 2012. *Desarrollo Humano en Chile 2012: Bienestar subjetivo: El desafío de repensar el desarrollo*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Rojas-Suárez, L.**, 2009. *Growing pains in Latin America: An economic growth framework as applied to Brazil, Colombia, Costa Rica, México, and Perú*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Sen, A. & Naussbaum, M.**, 1996. *La calidad de vida*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Valenzuela, A.**, 2011. *Crisis de representación y reforma política en Chile*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- World Economic Forum**, 2012. *The Global Competitiveness Report 2011-2012*. Geneva: World Economic Forum.

Comentario

LUIS LARRAÍN,

director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo

Quiero partir por agradecer la invitación del Centro de Políticas Públicas UC a comentar esta interesante presentación. Aprovecho la oportunidad para felicitar a la Universidad Católica y Adimark por la Encuesta Nacional Bicentenario, que siempre entrega información muy relevante para el análisis de la sociedad chilena. Este año, ese análisis cobra particular importancia, dada la abundante discusión intelectual que ha existido acerca de lo que sucede en este país, debate en el que me he permitido participar con un libro que provocadoramente titulé *El regreso del modelo*.

También es esta una oportunidad para reivindicar a las encuestas, tan vilipendiadas luego de su escaso poder predictivo en las últimas elecciones municipales. Quienes trabajamos hace mucho tiempo con ellas sabemos que sirven para algunas cosas y para otras, no. Definitivamente, encuestas como la Bicentenario contribuyen a mejorar la calidad del análisis acerca de nuestra sociedad.

Dicho esto, tengo que agregar, no obstante, que no creo que las encuestas de percepción sean (aún) un insumo importante para diseñar o proponer políticas públicas. En su presentación en la Universidad del Desarrollo, Carol Graham (experta en el tema del Brookings Institution) concluye que la satisfacción y la felicidad son temas relevantes, pero de los que aún no se sabe mucho. Señala que las variables que explican la felicidad o satisfacción son muy distintas y particulares de cada caso y no deben usarse con fines normativos. Un ejemplo que recuerdo de su intervención es que Afganistán presentaba, en una encuesta realizada hace pocos años, niveles de felicidad similares a los de EE.UU., porque como estaban en guerra, les alegraba seguir con vida. Claramente, la implicancia política no debiera ser iniciar

guerras en regiones con niveles bajos de felicidad. Pero por supuesto que una encuesta de percepciones, sobre todo si estas difieren tanto de la realidad, nos obliga a pensar y a formular hipótesis.

Creo que no es difícil coincidir en que la brecha entre percepciones y realidad, y la brecha entre evaluación de la situación personal y de la sociedad, son algunas de las cuestiones más interesantes a analizar.

Algunas hipótesis de Ignacio Irarrázaval

Luego de mostrar los números, la presentación de Ignacio Irarrázaval aventura ciertas explicaciones de por qué la percepción de los chilenos empeora mientras los datos reales mejoran (como la desigualdad, por ejemplo). Estas son formuladas a nivel de hipótesis, sin que se presente evidencia de que esas explicaciones sean ciertas, lo que nadie esperaría tan poco tiempo después de conocidos los datos de la encuesta.

Decimos esto porque a estas hipótesis pueden agregarse varias otras. Por ejemplo, quizás la buena percepción de todos los aspectos consultados en 2009 y la baja que se presenta en 2012, se deba simplemente a un Efecto Halo, donde los encuestados están haciendo una simple proyección de su descontento con el gobierno. Como esta, habrá muchas explicaciones igualmente consistentes con las tendencias observadas, pero por ahora no existe evidencia razonable a favor de ninguna. Probablemente el objetivo de este seminario sea justamente dar la partida y motivar este tipo de análisis.

Ignacio se atreve también con una hipótesis de frustración social, alentado probablemente por los datos que muestran que hay un evidente sesgo por NSE en las percepciones acerca de movilidad social. Esto encuentra una posible explicación en las crecientes expectativas que estos grupos poseen en un sistema que les está ofreciendo más oportunidades. Por lo tanto, esta frustración proviene del hecho de que estos grupos anhelan ver los resultados concretos de esas oportunidades, cuando

sabemos que los resultados en áreas como educación no son instantáneos. Valga aquí la clásica cita de Kant: “Dale a un hombre todo lo que desee y en ese mismo instante todo lo que desee no será realmente todo”.

Ignacio también advierte en los datos una correlación entre la posición política de los encuestados y la percepción acerca de movilidad social. En este sentido, quienes se declaran de izquierda tienen más insatisfacción con la evolución de la sociedad que la que puede inferirse de los datos personales que ellos tienen sobre el particular.

Es interesante también el análisis basado en Inglehart y sus teorías de modernización cultural, que se insinúa en la presentación de Ignacio.

Recordemos que el académico Ronald Inglehart (1998) ha desarrollado la tesis del cambio en los valores a raíz del desarrollo económico y la configuración de sociedades industrializadas avanzadas. Estas sociedades propenden a la generación de valores “postmaterialistas” asociados a la autorrealización, autoexpresión y participación, siempre en contraste con países que no han experimentado procesos modernizadores, donde persistirían valores de seguridad económica vinculados a las condiciones materiales de existencia.

Quizás en Chile podamos encontrar actualmente alguna manifestación de esta tendencia, aunque siempre de manera incipiente. Hoy es más habitual la emergencia de demandas ciudadanas vinculadas a temas de esta agenda (movimientos medioambientales, movimientos de defensa de derechos de minorías, calidad de vida, etc.). Una posible explicación es que nuestra ciudadanía está midiendo la actuación y los resultados de nuestros líderes a través de lentes cada vez más exigentes y propios de sociedades avanzadas. Sin embargo, en todos los estudios de opinión pública los temas que lideran el ranking de problemas a los que el gobierno debiera destinar mayor esfuerzo en solucionar siguen siendo asuntos “materialistas” por definición, como delincuencia, educación, salud, pobreza, sueldos y empleo (Encuesta CEP, noviembre-diciembre 2012). Por lo tanto, esta tesis podría no resultar del todo consistente.

Sin contar con un análisis experto, me parece advertir de los datos de la Encuesta Nacional Bicentenario, no así de otros que mostró Ignacio, que no hay mucho es-

pacio para atribuir a la preponderancia de valores post-materialistas algunas de estas brechas entre percepción y realidad. En todo caso, creo que Rodrigo Márquez, a raíz de la línea que ha seguido el PNUD en sus últimos informes de desarrollo humano, podría comentar este aspecto con ventaja.

El módulo Sociedad de la encuesta ofrece resultados interesantes de observar desde un punto de vista analítico, puesto que una lectura preliminar de los datos puede inducir a errores en su interpretación —como muchos de los debates facilistas que abundan por nuestros días— y, por lo tanto, en el tipo de inferencia que realizamos y transmitimos a la ciudadanía.

Otras posibles explicaciones

Nos parece interesante, en la búsqueda de explicaciones a estas brechas, revisar la literatura y ahondar un poco en lo que los expertos en opinión pública denominan evaluaciones sociotrópicas versus evaluaciones egotrópicas de los encuestados, entendiéndose por evaluaciones sociotrópicas las que se realizan considerando la situación de la sociedad en su conjunto, versus las evaluaciones egotrópicas, que lo que hacen es privilegiar una perspectiva individual de los acontecimientos (Killian, Schoen y Dusso, 2008).

Creemos que esta diferenciación explica algunos de los resultados del sondeo. Cuando se le pregunta a los entrevistados su percepción respecto a si en un plazo de diez años Chile habrá alcanzado las siguientes metas como país (ser una nación desarrollada, resolver el problema de la calidad de la educación, eliminar la pobreza, reducir la desigualdad de ingreso, etc.), la encuesta arroja resultados muy pesimistas. La opinión de que en diez años seremos un país desarrollado cae de 59% a 51%¹, mientras que quienes creen que será posible resolver el problema de la educación disminuye de 56% a 43%, lo mismo con la meta de eliminar la pobreza, cuya expectativa baja de 42% a 36%. Y en materia de desigualdades, la tendencia es similar, con una caída de 37% a 24% respecto a la meta de disminuir la desigualdad de ingresos.

¿Por qué la gente considera estos objetivos como tan lejanos, si los llamados “datos duros” muestran una tendencia positiva en muchas de estas materias?

¹ Una pregunta similar es realizada por la Encuesta de Desarrollo Humano PNUD 2011. En este sondeo se le consulta a los encuestados “¿qué tan posible cree usted que, de aquí a diez años más, Chile sea un país desarrollado?” y los resultados arrojan que el 17,8% considera que es “muy posible” y el 43,3% señala que es “algo posible”.

Por contrapartida al pesimismo, las preguntas —también en el ámbito de expectativas sobre el futuro— respecto a la comparación entre la situación que vivieron los padres y el encuestado a la misma edad, son marcadamente positivas en todos los ámbitos (trabajo, nivel de ingreso, infraestructura domiciliaria, vida familiar e inclusive en términos de disponibilidad de tiempo libre). Pero donde se torna aún más evidente la distinción entre la evaluación sociotrópica y egotrópica es al preguntar respecto al futuro de los hijos. Como se mencionó anteriormente, cuando a los encuestados se les consultó sobre la visión país a futuro, estos fueron marcadamente pesimistas. No obstante, a la hora de abordar los mismos temas, pero desde un enfoque personal (situación de sus hijos) las cifras son las siguientes: el 87% piensa que la educación que tendrán sus hijos será mucho mejor que la de ellos a la misma edad, y el 84% cree que el nivel de ingresos de sus hijos será mucho mejor que el de ellos a la misma edad.

Este optimismo personal a nivel de percepciones prospectivas encuentra cierto sustento, si miramos el estudio de Sapelli (2011) respecto a la distribución del ingreso, movilidad social y la pobreza en Chile, en un análisis por cohortes. La evidencia del anterior estudio muestra que nuestro país está avanzando al respecto. Además, entre 2009 y 2012, de acuerdo a datos de la CASEN, disminuye la desigualdad y aumentan fuertemente los ingresos de los más pobres en Chile, pero empeoran las percepciones.

Sin embargo, lo interesante de dilucidar es el pesimismo a nivel de la sociedad; ¿por qué la gente cree que sus

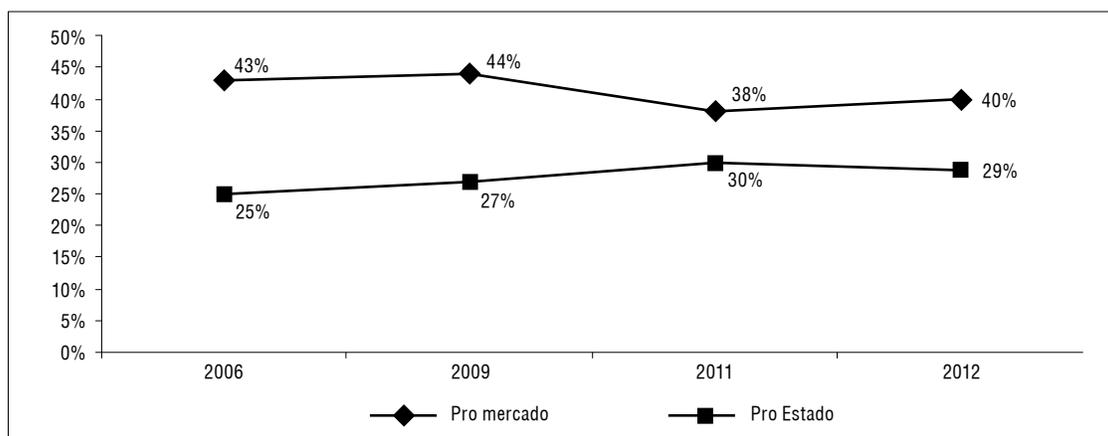
hijos estarán mejor, pero no piensa que como país estaremos mejor?

Siempre como hipótesis, podemos ofrecer otras explicaciones a estas brechas. Hemos planteado en el libro *El regreso del modelo* que la sociedad chilena ha estado en los últimos años en una fase de cuestionamiento a todo tipo de autoridad, tanto en el ámbito político, como el de la información pública, así como en el ámbito económico-productivo a través del cuestionamiento a las empresas, e incluso en el de la autoridad moral. Explicamos este fenómeno como parte de una tendencia a la desintermediación de las instituciones que tradicionalmente han ejercido en la sociedad el rol de “representantes” de las personas en todas estas actividades.

Al final, en nuestra opinión se trata de un problema de liderazgo en la sociedad chilena. Porque una posible explicación del pesimismo es que se ha impregnado en la conciencia colectiva la construcción discursiva/simbólica de un Chile donde las cosas no se hacen bien desde un punto de vista de la toma de decisiones. ¿Qué rol están ejerciendo los líderes políticos, los medios de comunicación y los líderes de opinión en general en relación a esto?

Ahora bien, ¿por qué sostengo que el pesimismo opera en clave de empatía frente a esta construcción simbólica del “derrumbe chileno”? Por lo siguiente: si de verdad la gente adhiere al pesimismo no solo desde un punto de vista discursivo, la sociedad —por ejemplo— sería mucho más revisionista en términos de la orientación hacia el rol del Estado, pero vemos que la misma Encuesta Na-

Gráfico 1 | Evolución de la percepción de bienestar y rol del Estado por posiciones pro mercado y pro Estado (2006-2012)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012.

cional Bicentenario dice que esto no es así: los chilenos, a pesar de todo este pesimismo, no se han volcado de manera radical hacia posturas estatistas. De hecho, la posición más proclive a la afirmación “el Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas” no ha logrado superar el umbral del 12% en los últimos seis años (11% para 2012) y, a nivel agregado, la suma de las preferencias pro mercado llegan al 40%, en contraste con las posiciones pro Estado que alcanzan el 29% a nivel agregado (ver Gráfico 1). Lo mismo se observa si se analizan los datos respecto al rol subsidiario del Estado. Acá las cifras muestran que el 43% expresa una postura pro Estado subsidiario, versus solo el 30% que manifiesta una postura pro Estado benefactor.

Luego, si se analiza el eje igualitarismo/eficiencia a raíz de la pregunta “lo más justo es que todas las personas que hacen un mismo trabajo tengan sueldos similares, independiente de su desempeño” versus “lo más justo es que una persona que hace mejor y más eficiente su trabajo debería ganar más que otra que lo hace peor”, se constata que las preferencias pro igualdad solo representan al 23% de los encuestados, en contraste al 55% que manifiesta una postura pro eficiencia.

Si vamos a la encuesta CEP de julio-agosto 2012, encontramos resultados similares, observando que el 43% expresa que “debería premiarse el esfuerzo individual aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos”, versus el 23% que manifiesta que “los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual”². Esto devela que la desigualdad como fruto del esfuerzo individual no solo es tolerada, sino que valorada. Son cifras relevantes, pero pocas personas las conocen y no colman la portada de los principales diarios ni los minutos estelares de los noticieros. Volvemos con esto al liderazgo del cual les hablé en un principio.

Finalmente, es relevante mencionar que cuando los chilenos se refieren a una demanda por menor desigualdad hacen referencia a una igualdad de oportunidades y no a una igualdad de resultados. El 46% señaló que “la igualdad que nuestro país debía alcanzar es una en la cual todos puedan progresar en sus proyectos, sin importar las distancias entre unos y otros”, en contraposición al 26% que considera que la igualdad por alcanzar es aquella en “que todos tengan lo mismo”.

Por último, creo preocupante la sistemática baja en la confianza en las instituciones en nuestro país, en particular en aquellas vinculadas al mundo político. En esta situación, a nuestro juicio, también incide el elemento liderazgo. En Chile tenemos una política muy superior al estándar latinoamericano. Al respecto, hay evidencia en términos comparados que destaca a nuestro Congreso Nacional en el contexto regional a través de una serie de indicadores como calificaciones, experiencia, efectividad y productividad legislativa, entre otros (Saiegh, 2010).

Pero nuevamente para la opinión pública es más llamativo el escándalo político, y por ende, quienes principalmente concentran la atención de los medios no son los políticos que realizan un trabajo serio y silencioso, por que como señalara Giovanni Sartori, en la actualidad, el pueblo soberano “opina” sobre todo en función de cómo los medios –y en particular– la televisión le induce a opinar (1998: 66). Por lo tanto, mi principal reflexión a raíz de esta encuesta es, por un lado, a que como académicos, actores políticos, analistas de políticas públicas o líderes de opinión, sin caer en una lógica conformista ni ciega a la realidad circundante, introduzcamos una cuota de prudencia en nuestras apreciaciones y diagnósticos. De lo contrario, este pesimismo social ya no solo estará presente en la encuesta de turno, sino que también producirá efectos negativos concretos, en términos de desencadenar un retroceso en materias en las cuales hemos avanzado como sociedad.

En síntesis, dado este contexto, la interrogante final que emerge a raíz del pesimismo de la sociedad es respecto a nuestros liderazgos. Quizás una respuesta es que faltan nuevas estructuras de intermediación que complementen el rol de la actividad estatal y de los medios de comunicación a la hora de ejercer liderazgo. Me refiero a lo que en la literatura en ciencias sociales se conoce como capital social. En la medida en que la formación de opinión y la construcción de una orientación y valoración hacia lo público se acerque más a las realidades locales, en lógica descentralizada y participativa, desde la sociedad civil organizada se podría generar de manera espontánea una mayor cohesión entre el ámbito de las experiencias personales con el de las experiencias como sociedad. Probablemente el desafío político del futuro se oriente en esta dirección.

² La pregunta en la Encuesta CEP se realiza en una escala de 1 a 10, donde 1 representa “los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual” y 10 representa “debería premiarse el esfuerzo individual aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos”. Las cifras se agrupan en tres niveles, correspondientes a los valores del 1 al 4, del 5 al 6 y del 7 al 10.

Referencias

- Estudio Nacional de Opinión Pública Centro de Estudios Públicos (CEP)**, noviembre-diciembre 2012.
- Informe de Desarrollo Humano**, 2012. *Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*. PNUD.
- Inglehart, R.**, 1998. *Modernización y posmodernización: el cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Killian, M., Schoen, R. and Dusso A.**, 2008. Keeping up with the Joneses: the interplay of personal and collective evaluations in voter turnout. En: *Political Behavior*, 30 (september), 323-340.
- Larrain, L.**, 2012. *El regreso del modelo*. Ediciones LyD.
- Saiegh, S.**, 2010. ¿Jugadores activos o apéndices del Ejecutivo? Una evaluación del papel de los legisladores latinoamericanos en la toma de decisiones. En: *Política y Gobierno*, 17 (1), 3-24.
- Sapelli, C.**, 2011. *Chile: ¿más equitativo? Una mirada distinta a la distribución del ingreso, movilidad social y la pobreza en Chile*. Ediciones UC.
- Sartori, G.**, 1998. *Homo videns: La sociedad teledirigida*. Editorial Taurus.

Comentario

RODRIGO MÁRQUEZ,

investigador del equipo del programa de
Desarrollo Humano del PNUD

En primer lugar, junto con agradecer a los organizadores por esta invitación, quisiera valorar enormemente la entrega de esta nueva versión de la Encuesta Nacional Bicentenario. Para quienes participamos del mundo de los estudios sociales es siempre un motivo de mucho interés poder acceder a nuevos materiales que son un aporte riguroso y consistente al conocimiento de la realidad social de Chile. A lo largo de sus diversas aplicaciones, la Encuesta Nacional Bicentenario se ha consolidado como una valiosa fuente de información donde es posible encontrar insumos útiles para construir una mirada analítica con perspectiva de largo plazo acerca de los fenómenos de cambio cultural. Como usuario, celebro enormemente la decisión de construir una serie de tiempo amplia y consistente. Dada la especial temporalidad de los fenómenos de cambio cultural, son estas series de tiempo las que mejor pueden aportar miradas analíticas que tengan validez y profundidad.

En el clima reciente del debate público en Chile, que ha traído diversos cuestionamientos a las encuestas de opinión pública, es importante reivindicar este instrumento en todo su valor; valor que emerge a partir del reconocimiento de sus potencialidades, pero también de sus limitaciones. Las encuestas no “dicen la realidad”, son meros insumos para construir una interpretación acerca de ella. Son recursos para un análisis que debe ser necesariamente integral, que debe incluir una sólida mirada teórica acerca de los fenómenos a estudiar y una ponderación en cuanto a las implicancias que se puedan derivar de sus datos. Las encuestas tampoco son un árbitro que pueda zanjar disputas que se instalan en el ámbito de la deliberación y la lucha ideológica.

Inmersos como estamos en procesos de transformación social crecientemente complejos y ambivalentes, es claro que en Chile necesitamos más y no menos encuestas como esta que hoy comentamos. Implementadas con el debido rigor técnico y solidez institucional (como es el caso de la Encuesta Nacional Bicentenario) estas trascienden a los objetivos de sus impulsores y se convierten en verdaderos “bienes públicos”. Por esto, su legitimidad es un bien que debe comprometer a todos quienes las promueven.

Hoy sucede algo interesante con las encuestas, al menos con aquellas cuyas temáticas se acercan a la relación de los ciudadanos con lo público: son un factor más en el mismo fenómeno que pretenden analizar. Efectivamente, son también parte del fenómeno cuando, por ejemplo, se analiza la confianza social. Las encuestas requieren para su implementación de la confianza de las personas que en ellas participan, pues existen gracias a la colaboración de los entrevistados, quienes hacen un primer acto de confianza al abrir las puertas de sus casas y responder con libertad, amparados en un compromiso de confidencialidad. Sus resultados y los comentarios sobre ellos ocupan importantes espacios en los medios de comunicación y por eso la información proveniente de encuestas es una porción relevante de los materiales con que las personas construyen sus conversaciones cotidianas. Esto supone una responsabilidad: sabemos que la opinión pública cree poco en lo que dicen las encuestas, pero ese “poco” hay que cuidarlo.

Lo anterior implica también un modo de valorar la información que producen. Construidas según un determinado canon de rigurosidad técnica, las encuestas hacen un reclamo de validez que es aceptado en base a parámetros de evaluación consensuados en una comunidad de practicantes consolidada (como los niveles de precisión, los tamaños de error, los diseños muestrales, los métodos de recolección de la información). Todo esto las hace técnicamente válidas, pero de ahí no se deriva inmediatamente que sus resultados sean la expresión fi-

dedigna de “la verdad” o de una realidad preexistente. Sabemos que en el ámbito de las ciencias sociales algo como eso está lejos de existir sino al interior de un enfoque, un marco teórico que, desde la mirada de unos específicos analistas, cobra sentido para ofrecer una interpretación posible de los fenómenos sociales. Interpretación que, como también sabemos, puede construirse en muy diversos sentidos a partir de un mismo “dato”. Es importante tener esto en cuenta para reconocer que esa misma aproximación implica aceptar que las encuestas no son “asépticas”; ellas no están (no pueden estarlo) desprovistas de las miradas y valoraciones específicas que los investigadores que las diseñaron tienen acerca de la realidad social. Sus preferencias, sus enfoques teóricos, se plasman en la selección temática, en la definición de las preguntas, en la conformación de las alternativas de respuesta, en el modo en que se analizan los datos (hasta el más inocente ejercicio de “agregar categorías” puede expresar esas valoraciones propias de los investigadores acerca de los fenómenos que estudian). Son todas, por cierto, decisiones válidas y legítimas de tomar por quienes las diseñan. En tanto se justifiquen y se expliciten, no alteran la validez de los resultados, por el contrario, permiten una mejor valoración externa de la información que ofrecen.

Las encuestas son, además, una expresión de las instituciones que las hacen. No son solo cuestionarios, sino que deben entenderse en el marco institucional del cual forman parte, de los actores que las apoyan y las validan. Por todo lo anterior, si bien son instrumentos respaldados científicamente, no pueden verse como portadores de ninguna “verdad desnuda” ante la cual al lector no le quede más remedio que “rendirse a la evidencia”. En ese sentido, deben ser también evaluadas y usadas con distancia crítica.

Sobre el fondo del panorama descrito por la Encuesta Nacional Bicentenario

Quiero centrar mi comentario en una de las conclusiones generales de la Encuesta Nacional Bicentenario: aquella que da cuenta de una sociedad satisfecha con su vida familiar, con buenas expectativas respecto de su futuro personal, pero desconfiada de las instituciones y de su capacidad para solucionar los problemas urgentes del país.

El panorama que nos muestra esta versión de la encuesta resulta muy coincidente con la mirada sobre Chile que se plasma en nuestro último Informe Nacional de

Desarrollo Humano publicado en agosto del año pasado (PNUD “Desarrollo Humano en Chile 2012: bienestar subjetivo, el desafío de repensar el desarrollo”). En él constatamos que, mirados en una perspectiva de largo plazo, los chilenos se muestran cada vez más satisfechos con sus vidas, pero al mismo tiempo más críticos de la sociedad en que viven. Nuestro informe, al igual que la encuesta, tematiza aquella situación desde la percepción de la satisfacción con la propia vida (aspecto denominado en algunos casos como la “felicidad” y que nuestro informe prefiere por razones técnicas llamar “bienestar subjetivo”) del avance en términos de la realización de los proyectos personales y del incremento del bienestar familiar. Asimismo, tematiza la crítica a la sociedad a partir de la desconfianza en las instituciones, la evaluación de las oportunidades que el país entrega para la realización de los proyectos de vida y el modo en que se construyen las relaciones sociales en Chile.

Estas dos tendencias (incremento del bienestar personal y aumento de la insatisfacción con la sociedad) pueden verse como una situación paradójica; pareciera que en general el sentido común tendiera a demandar una coherencia entre ambas. Idealmente también se aspira a que hubiera esa coherencia. Sin embargo, en los hechos, hoy en Chile no existe. Explicar esta situación resulta de la mayor importancia. Pretendo exponer cuál es nuestra visión acerca de lo que está detrás de esa realidad. Pero antes quiero puntualizar que si bien el porcentaje de quienes se declaran satisfechos con sus vidas aumenta de manera importante en el largo plazo, subsisten aún diferencias relevantes entre grupos sociales (véase, por ejemplo, la brecha entre niveles socioeconómicos). En nuestros datos, se declaran muy satisfechas con sus vidas el 90% de las personas clasificadas en la categoría socioeconómica ABC1, cerca del 70% en los grupos C2 y C3, y en torno al 55% en los grupos D y E. Existe entonces en esta dimensión otra expresión de la desigualdad social que, más allá de la tendencia general, no debe perderse de vista.

Hecha la prevención, vuelvo a la pregunta: ¿qué está detrás de esta aparente paradoja entre bienestar personal y crítica a la sociedad que tanto la Encuesta Nacional Bicentenario como el Informe PNUD hacen presente? Desde nuestra mirada, la coexistencia de esas dos tendencias se asocia, entre otros, a los siguientes fenómenos, aquí por supuesto muy sucintamente reseñados.

Una primera explicación la situaría en relación con la imagen que tienen los chilenos acerca del rol de la sociedad

en el logro de su satisfacción personal o su felicidad: la mayoría tiende a separar tajantemente ambos espacios. Cuando se le pregunta a las personas, suelen pensar en su satisfacción personal como algo que cada uno debe construir, independientemente o al margen de la sociedad, casi en contradicción con ella o defendiéndose de ella. Es la internalización de la máxima del “rascarse con sus propias uñas”. En este empeño, el refugio privilegiado es por cierto la familia. Desde esa mirada, digamos “privatizada” de la felicidad personal, no es de extrañar que la gente pueda sin más separar su juicio acerca de su trayectoria personal y familiar del que tienen sobre la sociedad en que viven. Por cierto, un análisis más profundo muestra que “la sociedad sí importa” cuando queremos explicar los factores asociados a la satisfacción con la vida. El hecho contundente es que en una medida importante los condicionantes estructurales sí inciden en las mayores posibilidad de alcanzar altos niveles de satisfacción con la vida (recuérdese lo ya dicho acerca de las diferencias en satisfacción vital según grupos socioeconómicos).

Una segunda explicación tiene que ver con los costos del proceso de búsqueda de la realización de los proyectos de vida en el contexto de una “felicidad privatizada”. Las personas han sido capaces de proponerse objetivos, proyectos, y en buena medida los han logrado, pero su lucha cotidiana no ha estado exenta de esfuerzo y sacrificio. En sus vidas existen aún importantes ámbitos de inseguridades que ponen presión a su esfuerzo cotidiano. Nuestro informe destaca, entre otros, dos aspectos en que, más allá de los avances en sus vidas personales, los encuestados siguen manifestándose especialmente críticos: la seguridad humana y las relaciones sociales en que se ponen en juego la dignidad y el respeto.

Por seguridad humana nos referimos a cuestiones básicas para construir la vida cotidiana, como la certeza de poder acceder y pagar una atención de salud en caso de necesitarla; mantener y conseguir un trabajo acorde a las necesidades; percibir que se contará con ingresos suficientes en la vejez, o sentirse protegido frente a la delincuencia. Todos esos aspectos son evaluados muy negativamente por la gente. Una mirada comparativa de largo plazo muestra que de 1997 al 2012 los avances en esas materias, si bien existen, son modestos y, en general, aún hoy, una importante mayoría se siente más bien insegura en esos tres ámbitos. Esta situación configura lo que podemos llamar un “pendiente”, un aspecto que a pesar del avance innegable de Chile en materia de desarrollo está aún al debe en la construcción de seguridad

para la vida de las personas. Esa deuda, en consecuencia, se traduciría (se “cobra”) en un mayor juicio negativo hacia las instituciones, hacia la sociedad que falla en generar mejores condiciones para el desarrollo de esas seguridades básicas.

El otro gran ámbito de crítica que hemos detectado tiene que ver con el modo en que se construyen actualmente las relaciones sociales en Chile. Esto se asocia con el hecho de que hoy los chilenos y chilenas sienten que en las relaciones sociales —entre las personas, pero especialmente entre las personas y las instituciones tanto públicas (Estado) como privadas (empresas)— predomina el abuso y la falta de respeto. Efectivamente la crítica a las instituciones se funda en buena medida en experiencias de maltrato, discriminación e irrespeto de derechos, que sufridas directamente por unos, y tematizadas profusamente por otros en sus conversaciones cotidianas, construyen una imagen de sentido común que consolida un hecho masivamente reconocido: “En Chile los poderosos abusan y no respetan la dignidad de las personas”. Esta imagen negativa de las relaciones sociales se nutre de experiencias cotidianas ocurridas en muy diversos ámbitos (el comercio, frente a las grandes empresas, frente a los organismos públicos, entre otros). Todo ello atenta contra la dignidad de las personas, quienes demandan de su relación con las instituciones no solo la entrega oportuna de servicios o rendimientos objetivos, sino también, y tal vez más que todo, la construcción de un modo de relación que les reconozca en su dignidad, que les respete y sea un aliado en la realización de sus proyectos personales.

Los datos del Informe PNUD muestran en este punto una situación interesante: la experiencia de haber sufrido maltrato y abuso es bastante transversal a todos los estratos socioeconómicos, sin embargo, la “capacidad de hacerse respetar” frente a esos abusos está muy desigualmente distribuida entre esos mismos grupos. Esto da cuenta, una vez más, que la inequidad en Chile tiene una cara que no es material, sino que refiere a la dispar distribución de aspectos, como la dignidad y el respeto, que son esenciales en la construcción del juicio que cada uno tiene de la sociedad en la que vive.

Hasta aquí hemos reflexionado sobre algunos posibles antecedentes que expliquen qué está detrás de esta disociación entre la evaluación de la vida personal y de la sociedad en que se vive que nos muestra la Encuesta Nacional Bicentenario. Pero junto a ello me parece necesario preguntarse acerca de cuál puede ser la evolución de esta relación.

¿Seguirá siendo así esto en el futuro? ¿Es sustentable para nuestra sociedad esa distancia? Si se responde a esa interrogante de manera normativa, es decir, con arreglo a una cierta visión del tipo de sociedad a la cual se aspira, claramente la respuesta es “no”. Sin embargo, si se responde en términos más bien funcionales, o sea, desde la perspectiva de la inercia de un orden social que de todas maneras se autoreproduce, tal vez la respuesta sería “sí”. Y quizá eso sea lo realmente preocupante: que podríamos inercialmente continuar con un modo de construir nuestra convivencia que refuerce la privatización del bienestar individual y sus costos a expensas de la calidad de nuestras relaciones sociales y la legitimidad de nuestras instituciones. De hecho, dirán algunos, no se escapa al análisis que esta disociación no es solo reciente; tiene antecedentes por lo menos desde hace más de una década y de todas maneras el país ha podido sustentarse y sostener una trayectoria de desarrollo que ha generado innegables oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas.

A mi juicio esto debe ser visto como un desafío que nos obliga a la acción, pues esta distancia puede llegar a constituirse en un importante bloqueo para el desarrollo chileno. En la medida en que como país deberemos enfrentar en el futuro importantes desafíos (por ejemplo los derivados de los cambios demográficos, como envejecimiento, migraciones, las necesidades de transformación de nuestra matriz energética, o los desafíos en materia medioambiental) es evidente que requeriremos cada vez más de la capacidad de actuar socialmente. Para ello, tenemos que reconocernos como parte de un proyecto colectivo en el cual no es ni posible ni deseable “irse para la casa y rascarse con las propias uñas”, sino que es vital admitir que el logro de los objetivos individuales demandará una mayor capacidad colectiva de moldear un entorno de oportunidades que lo haga posible para todos. Entonces, ¿cómo superar esa distancia aparentemente insalvable? Siendo esta una pregunta muy difícil de responder, me atrevo simplemente a insinuar algunos elementos a tener en cuenta.

En primer lugar creo vital, como una precondition, reconocer que tenemos un problema o desafío que debemos asumir colectivamente. No parece ocioso hacer esta prevención cuando, al seguir el debate público acerca de la interpretación del momento del país, no es raro encontrarse en distintos medios y voceros miradas que tienden a desconocer que esta disociación sea realmente un problema. En otras palabras, persisten aún quienes piensan que esto es normal o que incluso no existe. Tal

vez sea el modo en que se ha tematizado esta discusión (la del malestar, la de la crítica al modelo de desarrollo) lo que los hace reticentes a reconocer que hay un límite crítico en una deslegitimación o malestar tan generalizado hacia nuestras instituciones. Luego, es necesario asumir toda la complejidad del cuadro que nos muestra la Encuesta Nacional Bicentenario y el Informe PNUD 2012: que existe tanto una crítica a la sociedad y sus instituciones como una valoración positiva de lo que las personas han podido lograr en sus vidas. A ratos, algunos tienden a olvidar esta parte del análisis construyendo imágenes que apuntan a señalar que “está todo mal” o incluso que las personas que se reconocen satisfechas con sus vidas solo podrían hacerlo dado que estarían “alienadas”. Ambas posiciones, pensar que “aquí no pasa nada” o que “está todo mal”, nos parece que no contribuyen a generar el tipo de reflexión que el país necesita.

En segundo lugar, creo necesario ampliar la mirada y complejizar el debate. Hacer esto requiere, entre otras cosas, superar algunas falsas dicotomías. Por ejemplo:

Objetivo versus subjetivo: se requiere comprender que la sociedad se construye no solo de realidades objetivas sino también subjetivas, esto es, de aquellas que tienen que ver con la experiencia y el juicio que hacen acerca del modo en que viven sus vidas en una comunidad específica. Esto implica reconocer que aspectos como las percepciones, los imaginarios, las representaciones, que son maneras en que la gente decanta sus temores y aspiraciones, también son relevantes; que la subjetividad importa, tanto como una externalidad como un ámbito adicional a los logros objetivos en que debe construirse el desarrollo del país. Esta dicotomía objetivo-subjetivo tiene, a mi juicio, importancia, pues a ratos genera diagnósticos parciales que buscan ampararse en cifras objetivas del funcionamiento de la sociedad (crecimiento, empleo) para desconocer que, siendo resultados muy relevantes e indispensables, no bastan para construir un desarrollo humano apropiado y pertinente para la vida de las personas. Se requiere, entonces, poner más atención a la subjetividad como un ámbito relevante y del cual pueden derivar conductas objetivas (como por ejemplo, la no concurrencia a votar en las elecciones) que tengan en sí mismas consecuencias para el conjunto de la sociedad. Que la subjetividad importa es, por lo demás, algo bien entendido en otros contextos: sabemos hace rato que la confianza (un factor subjetivo) es vital para el crecimiento de la actividad económica, tanto es así que hace tiempo en Chile se mide la percepción de confianza de los consumidores y de los empresarios en

el futuro de la actividad económica. La importancia que se le da en esos ámbitos debe, a mi juicio, dársele también en relación con otras áreas de la vida social, como la confianza en las instituciones y las relaciones sociales en general. La Encuesta Nacional Bicentenario, su continuidad y amplia difusión es, como ya dije, una gran contribución en ese sentido.

Mercado versus Estado: esta es, desde mi perspectiva, otra falsa dicotomía que debe superarse. Quizá su recurrencia en los análisis tenga que ver con algunos “fantasmas” de debates anteriores que aún son portados por cierta parte de la elite chilena. En muchos casos siguen contraponiéndose esos términos, haciéndolos rivalizar incluso en preguntas de encuestas. Ello tiende a oscurecer el hecho de que son más bien ámbitos de lo social que, siendo distinguibles analíticamente, se complementan. En no pocos casos es precisamente la acción del Estado la que ha tenido que generar las condiciones para que se desarrollen mercados competitivos. Es así como en el último tiempo en Chile hemos visto varios ejemplos donde ha sido el Estado, a través de las regulaciones, el que ha hecho un esfuerzo por garantizar que los mercados y la libre competencia funcionen realmente. Esta oposición tajante entre uno y otro se lleva al extremo, y a mi juicio se confunde aún más, cuando se busca situar a las personas en un aparente rol de árbitros entre uno y otro. En este punto quisiera, solo por su utilidad sustantiva, hacer alusión a una pregunta específica de la Encuesta Nacional Bicentenario. Me refiero a aquella donde se le pide a los entrevistados que se posicionen en un continuo de 1 a 10, donde 1 representa su total acuerdo con la frase “cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar” y 10 significa total acuerdo con la frase “el Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas”. Más allá de los porcentajes de respuesta, resalto el hecho de que cuando se resumen los resultados se asigna a las posiciones 1 a 4 el rótulo de “pro mercado” y a las posiciones 7 a 10 el de “pro Estado”. Esto, me parece, requiere ser revisado: ¿por qué el apoyar la responsabilidad individual puede ser considerada inmediatamente una actitud pro mercado? (de hecho, este polo de la pregunta no usa en su formulación la palabra “mercado” la cual, sabemos, no es una que goce de mucho prestigio en el imaginario actual de los sentidos comunes). Insistir en una visión contrapuesta de ambos no hace justicia al modo en que las personas hoy en Chile construyen sus vidas. Ellas se mueven en distintos ámbitos de manera fluida buscando en la mix-

tura (sin precondiciones teóricas) las mejores opciones para el despliegue de su esfuerzo individual en pos de la realización de sus proyectos personales (por ello es posible, por ejemplo, protestar en la mañana en favor de educación pública e ir a un mall en la tarde para aprovechar una buena oferta). Este punto se relaciona también con mi última apelación en relación a la necesidad de complejizar el análisis.

Me parece necesario superar la falsa dicotomía entre esfuerzo personal y construcción social de oportunidades. Pienso que para avanzar en superar una separación radical entre “juicio acerca de mi vida” y “juicio acerca de la sociedad”, lo que hoy se requiere es renovar la imbricación entre lo individual y lo social. Lamentablemente, me parece que el debate público a menudo tensiona los términos para hacer casi opuestos el esfuerzo individual y la acción del Estado, por ejemplo, a través de las políticas públicas. Algo de esta idea parece expresarse en otra pregunta de la Encuesta Nacional Bicentenario: aquella que pide a las personas posicionarse en un continuo donde el 1 representa el máximo acuerdo con la frase “la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro”, y el 10 representa el máximo acuerdo con la frase “para progresar en la vida se requieren garantías del Estado de buena educación y trabajo”. Al presentar las respuestas, al primer polo se le denomina “pro esfuerzo personal” y al segundo, “pro protección”. Como ya comentamos, las encuestas tienen sus limitaciones y en ocasiones las preguntas deben forzar respuestas para distinguir posiciones extremas y poder así clasificar a las personas. Lo importante es, al momento del análisis, hacer las prevenciones del caso.

Personalmente, me sorprende que en algunos debates se enuncie como una gran novedad la valoración que hoy hace la gente del esfuerzo individual, como si existiera un “antes” donde no se hubiera hecho (si queremos apreciar un cambio cultural profundo tendríamos primero que solazarnos de que las personas piensen cada vez más que su futuro ya no depende de “la suerte”, sino justamente de ese esfuerzo individual). Lo problemático es que en ocasiones se usa ese argumento para abogar por una disminución del tamaño o rol del Estado. A mi juicio, esto es una interpretación errónea. Sin duda que pueden haber distintas visiones acerca del modo en que la sociedad debe o no diseñar sus políticas públicas o sobre el tamaño del Estado, pero nada de eso puede hacernos perder de vista que nuestras vidas siempre están enmarcadas en un contexto social (de recursos, normas,

relaciones, poder) que actúan como un escenario que potencia u obstruye nuestro despliegue personal. En consecuencia: ¿esfuerzo individual? Por supuesto, pero también condiciones sociales que permitan que el despliegue de ese esfuerzo sea fructífero.

La oportunidad que la situación actual nos plantea

El conjunto de desafíos que se desprenden de los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario 2012 representan, sin duda, una tarea enorme para los actores públicos. Ninguno de estos objetivos está exento de dificultades, todos son polémicos y para plasmarse en cambios reales requerirán de una necesaria deliberación social que sea lo más inclusiva posible. La misma encuesta nos muestra, además, otras características de la subjetividad actual de los chilenos y chilenas que debemos tener en cuenta al momento de asumir esa deliberación: una importante percepción de la existencia de conflictos entre grupos sociales, una cierta caída en el optimismo acerca de la capacidad futura del país de avanzar en el logro de metas colectivas, y la ya anotada desconfianza en las instituciones.

Pero aún frente a este panorama crítico creo que es posible observar ese escenario como uno más bien plagado de oportunidades. Esto implica mirar esa crítica como

un germen positivo, o en palabras del Informe PNUD 2012, valorar “el potencial creativo del malestar”. Sin duda esta “invitación” no es fácil de aceptar y espero no se escuche como mero optimismo voluntarista. Es claro que la noción misma de “malestar” lleva inscrita una connotación negativa: se cree ver en él solo una fuente de protesta, conflicto y desorden. Sin embargo, esta imagen pierde de vista que el malestar social, canalizado institucionalmente, puede tener un importante potencial creativo. Puede, entre otras cosas, ser un antídoto contra la conformidad autocomplaciente, permitir la detección de problemas, hacer surgir propuestas alternativas, organizar actores con intereses comunes, identificar un horizonte de lo deseable, proveer experiencias de sociedad y sentido de pertenencia. En definitiva, contribuir a generar mejoras institucionales sustantivas. Reconocer y activar el potencial creativo del malestar requiere ver el conflicto como un ejercicio propio y necesario de la democracia y no como un peligro que se debe evitar. En consecuencia, tenemos una gran tarea por delante. Hecho el diagnóstico del malestar social, corresponde ahora a los liderazgos de diverso tipo proponer al país maneras de asumirlo que estén a la altura de su complejidad y que aprovechen también la oportunidad que este representa.

Violencia pública y privada en el Chile actual

EDUARDO VALENZUELA, director del Instituto de Sociología de la Universidad Católica

En los alrededores de 1970, el profesor Eduardo Hamuy encontró niveles de percepción de violencia institucional en Chile extremadamente preocupantes: el 52% de los respondientes de una encuesta realizada en el Gran Santiago (Hamuy, 1970, n= 886) consideraba que había que darle “mucho importancia a la violencia en el país, porque amenazaba con destruir el orden institucional”. Cuarenta años después, la Encuesta Nacional Bicentenario (2011, n= 806, tomando como referencia a los respondientes del Gran Santiago también) obtuvo 57% de menciones para la misma sentencia en una pregunta de idéntico fraseo. Hamuy realizó su encuesta en la víspera del gran ciclo de violencia política que se inaugura en los años setenta y que culmina con el retorno a la democracia veinte años después. Y si bien hoy la violencia institucionalmente relevante ha quedado atrás, en la percepción de los chilenos del Bicentenario sigue siendo un problema significativo y acuciante.

Existen dos líneas de interpretación para este sorprendente resultado. La primera es que justamente después de haber experimentado los rigores de la violencia política, el umbral de tolerancia respecto de la violencia institucionalmente dirigida —y de la violencia en general— se ha incrementado notablemente. Episodios de violencia relativamente nimios y aislados se convierten en gran cosa. La Encuesta Nacional Bicentenario realizó la pregunta justamente cuando estallan las primeras movilizaciones masivas de estudiantes que generalmente están acompañadas de violencia callejera.

Una segunda línea de interpretación es que la gente dirige su mirada más allá de la violencia institucional (o políticamente motivada) y que —a despecho de la pregunta misma— manifiesta su preocupación por otras formas de violencia social a las que atribuye también consecuen-

cias institucionales. Después de que se cierra el ciclo de violencia política a comienzos de los noventa (cuyo episodio de clausura fue el asesinato del senador Jaime Guzmán), el país enfrenta una escalada inédita que colocará a la delincuencia —en los siguientes 20 años— como el problema más perturbador de la convivencia nacional.

La delincuencia ha existido siempre, desde luego, pero en las últimas décadas se ha desplazado peligrosamente desde el hurto y robo simple hacia el robo con violencia (asociado con el uso de drogas ilícitas). De esta manera, se ha ido transformando paulatinamente en crimen —sobre todo en la imaginación de la gente— a pesar de que la tasa de homicidio sigue siendo relativamente baja y que los mercados de drogas ilícitas no han producido violencia organizada y en gran escala que comprometa a las instituciones de control y sanción penal.

En estos años también se ha producido otro fenómeno: la visibilización de la violencia privada que siempre estuvo oculta bajo un manto de indiferencia y tolerancia pública. La violencia intrafamiliar ha pasado a ser un problema socialmente asumido e institucionalmente relevante, sobre todo la violencia contra la mujer dentro del matrimonio y de las relaciones de cortejo. Más recientemente, se ha abierto un nuevo foco de atención sobre la violencia escolar (*bullying*), que gozó de una amplísima tolerancia en el pasado, pero que hoy ha visto cambiar drásticamente los umbrales de preocupación y aceptación, al menos, dentro del sistema escolar.

El escenario de la violencia privada se agrega al de la violencia pública, generando un cuadro más complejo de imágenes y un repertorio más saturado de episodios de violencia que el que existía otrora. Tal vez esta visi-

bilización creciente de la violencia en todas sus formas —amplificada poderosamente por los medios de comunicación, especialmente la televisión sensacionalista— aumente la percepción de violencia que existe en el país y exacerbe —para bien y para mal— el sentido de urgencia y gravedad que reviste el problema.

Situación de la violencia

La Encuesta Nacional Bicentenario logró estimar una prevalencia de victimización de 13% en el último año para el conjunto de la muestra, lo que significa que alrededor de 1 de cada 8 chilenos ha sufrido alguna agresión o amenaza de agresión de parte de terceros en los últimos doce meses. La mitad de esta violencia (52%) puede considerarse como privada, en la medida en que proviene de personas a las que se conoce por su nombre; mientras que la otra mitad puede clasificarse como violencia pública, dado que viene de desconocidos.

Otra clasificación posible sería estimar la violencia conforme a su lugar de ocurrencia. En este caso, un tercio de los episodios transcurre en la casa y, como es de suponer, la mayor parte de ellos proviene de conocidos. Los dos tercios restantes se registran fuera del hogar. Entre ellos llama la atención la importancia de los que suceden en los lugares de trabajo y estudio (17% del total, casi todos provenientes de personas conocidas) y los que ocurren en la calle (39%), que provienen sobre todo de contactos casuales con transeúntes.

Los datos de la Encuesta Nacional Bicentenario permiten obtener otras conclusiones relevantes respecto de la prevalencia de la violencia. Una parte importante de la que proviene de conocidos sucede fuera de la casa, ya

sea en lugares de trabajo y/o estudio, o en la calle (probablemente violencia entre pares, aunque este estudio no considera violencia escolar, puesto que la muestra se limita a mayores de edad). Asimismo, la mayor parte de la violencia de desconocidos viene de población no delictiva y está presumiblemente formada por roces y conflictos que escalan casualmente en el contacto público entre personas. La violencia delictiva, en tanto, representa un pequeño porcentaje del total (12%), aunque es posible que la intensidad de estos episodios sea mayor que la que producen otros casos y que esta clase de victimización tenga consecuencias más profundas en daño y temor. Por último, la violencia estatal —aquella que proviene de la policía— prácticamente no aparece reportada (con una cifra del 0,4% del total), lo que indica que una baja intensidad en la violencia de disturbios es de parte de los manifestantes o de la policía.

¿Quiénes están más expuestos a experimentar violencia en nuestro país? Los resultados son bastante concluyentes respecto de violencia privada, ya que son las mujeres las más vulnerables, en un orden que se estima en alrededor de 50% de probabilidades. También la violencia privada es dos veces más probable en los niveles socioeconómicos medios y bajos (respecto del alto), lo que puede indicar mayor prevalencia de violencia intrafamiliar y de violencia barrial o vecinal, ambas tendencias bien documentadas por estudios especializados.

En el caso de la violencia pública las cosas se invierten. Son los hombres quienes tienen una probabilidad mayor de ser víctimas (cercana al 40%) y quienes habitan Santiago (50% respecto de los que viven en regiones), lo que confirmaría que la agresividad pública es notoriamente más significativa entre hombres y en las grandes ciudades.

Tabla 1 | **Locación y tipo de agresor para último episodio de violencia (%)**

¿Dónde ocurrió?	¿Quién actuó violentamente en su contra?		
	Conocidos	Desconocidos	Total
Casa	28	5	33
Fuera de la casa	24	43	67
Total	52	48	100

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario (2012, n=255 prevalentes de último año).

Delitos de odio

Una forma especial de victimización son los llamados delitos de odio (*hate crimes*), que reúnen aquellas agresiones motivadas únicamente por características adscritas o atributos de una persona, sin importar lo que ella haga o haya hecho. Alrededor de un tercio de la violencia total aparece reportada como delitos de odio, pero una proporción importante no es capaz de identificar la característica por la cual fue amenazada o agredida. En efecto, el 33% de quienes declaran haber sido víctimas de alguna agresión en el último año la atribuyen a una característica suya, pero solamente dos tercios identifica con precisión esa característica. La forma canónica del delito de odio es la violencia dirigida contra un atributo considerado minoritario o que sufre estigmatización (violencia de estigma), siendo típicas las agresiones que se dirigen contra miembros de minorías sexuales o étnicas (como el resonante caso del asesinato de Daniel Zamudio, un joven atacado por su condición homosexual). Esta clase de agresión aparece poco reportada en estos datos. El delito de odio se dirige contra características convencionales, como la edad y el sexo (pero no la orientación sexual), y se anida sobre todo en atributos de vulnerabilidad (la condición femenina, la vejez) más que de estigmatización.

Violencia pública versus violencia privada

Muchos estudios indican que la violencia prevalece cuando existen actitudes favorables hacia el uso de la fuerza en la resolución de conflictos. El umbral de tolerancia social frente a la violencia constituye por ello un indicador importante a la hora de estimar el potencial de violencia que existe en un determinado momento o situación. La violencia la ejercen finalmente unos pocos, pero puede encontrar soporte y resonancia considerables en la sociedad que la alimenta y reproduce. El umbral de tolerancia puede fijarse en la criminalización de distintos episodios de violencia, es decir, en la calificación que se hace de esos episodios como delitos (o crímenes). Cuando un acto de violencia es considerado efectivamente un crimen, es posible afirmar que la tolerancia respecto de tales actos será consistentemente baja. A la inversa, cuando un acto violento no es considerado un delito (o solo en algunas circunstancias específicas puede ser visto como tal), el umbral de tolerancia se eleva considerablemente.

La Encuesta Nacional Bicentenario ofrece datos para estimar el nivel de aceptación que encuentra la violencia pública y privada en un conjunto de cuatro situaciones diferentes debidamente calificadas (ver tabla pág. 39). En su conjunto, los resultados muestran que la tolerancia hacia la violencia privada es más alta que hacia la violencia pública. Todavía alrededor de la mitad de los chilenos no criminaliza la violencia de cortejo (“un joven que abofetea a su polola por estar coqueteando abiertamente con un hombre”) y la violencia conyugal (“un marido abofetea a su mujer por una pelea que ella comenzó por razones de dinero”). La legitimidad del castigo físico a los niños sigue siendo aparentemente alta (apenas 20% criminalizaría una palmada a una niña pequeña por una desobediencia menor). Los estudios han mostrado que la violencia contra la mujer está relacionada con actitudes favorables hacia la desigualdad de género, la separación de roles y el dominio masculino que comúnmente llamamos “machismo”. También la creencia de que las mujeres son culpables de su propia victimización provee mucha legitimidad a la violencia contra la mujer. La criminalización de la violencia intrafamiliar y el soporte social a las víctimas han sido las principales estrategias para reducir la violencia de género, en la medida en que actúan sobre las dos premisas de esta clase de violencia.

Por contrapartida, la violencia pública aparece más criminalizada, sobre todo bajo la forma de vandalismo (“un grupo de jóvenes que destruye el alumbrado o señalética pública durante la noche”), saqueo (“un grupo de personas que saquea un local comercial después de un terremoto”, que recuerda los ominosos sucesos de la ciudad de Concepción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010) y violencia de disturbio (“un joven que lanza objetos contundentes sobre un vehículo de la policía durante una protesta”, que remite a la violencia de “encapuchado”, muy característica de las manifestaciones estudiantiles del último tiempo). Solamente el bloqueo de caminos, y probablemente otras formas de uso de la fuerza de baja intensidad, como las tomas de establecimientos o de terrenos, están menos penalizadas.

La tolerancia hacia la violencia privada es significativamente más alta entre los hombres, quienes pueden tener hasta 60% más de probabilidad de aceptarla. La disparidad de género en este campo es un dato importante que debe tomarse en debida consideración, porque muestra que las actitudes hacia la violencia han cambiado más rá-

pidamente entre las mujeres (que normalmente toleraron mucha agresión masculina) que entre los hombres. Los datos no confirman un efecto generacional importante en el umbral de tolerancia frente a la violencia privada, como es de esperar en una generación joven, educada mucho más intensamente en los principios de la igualdad de género y en la prevención de la violencia intrafamiliar. El efecto de clase que presume mayor aceptación hacia la violencia de género a medida que se desciende de nivel socioeconómico, aparece muy tímidamente.

La tolerancia hacia la violencia pública, por su parte, es consistentemente más elevada en los niveles socioeconómico medio y sobre todo bajo (hasta 60% más chances de aprobar la violencia pública entre los más pobres), lo que mostraría que el apego al orden público tiene una gradiente de clase importante. También hay indicios de que quienes se identifican con la derecha aceptan menos la violencia pública, aunque los coeficientes de variación no son muy elevados y no siguen una gradiente, como en el caso de las variaciones socioeconómicas. Un último dato importante es que Santiago aparece con niveles de tolerancia mucho más elevados que las regiones para la violencia pública.

Violencia estatal versus violencia social

Otra forma de clasificar los actos de violencia es distinguir entre la violencia que ejerce el Estado contra los ciudadanos en situaciones calificadas e, inversamente, la violencia que ejercen los ciudadanos sobre el Estado para satisfacer demandas socialmente legítimas.

El Estado suele ser definido como el depositario por excelencia de la violencia legítima, pero claramente no todos los actos de violencia estatal cuentan con aceptación. La legitimidad de la violencia estatal es más bien baja, salvo cuando se trata de reprimir actos delictuales, incluyendo delitos, como los saqueos que comete población no delictiva. Más allá del delito, el uso estatal de la fuerza aparece poco aceptado, por ejemplo, “cuando se producen manifestaciones públicas no autorizadas” o “cuando se bloquean caminos o levantan barricadas”. Esta estructura de legitimación de la violencia estatal se aparta del paradigma hobbesiano que concede al Estado el derecho de guardar el orden público en toda circunstancia (incluyendo la posibilidad de cancelar los derechos de las personas cuando existen perturbaciones graves de ese orden), y se aproxima al paradigma populista que pre-

valece en nuestro orden político que obliga al Estado a resolver los conflictos a través de la concesión, el favor y el don (las autoridades deben hacerse presente y entregar soluciones dadivosas). La amplísima demanda por el uso de la fuerza para contener la delincuencia (que incluye la aceptación de la pena de muerte y un vibrante populismo carcelario) desaparece, sin embargo, a la hora de justificar la violencia estatal en el control del orden público.

Tampoco el uso social de la fuerza cuenta con demasiada justificación, incluso cuando los motivos son socialmente aceptados, tal como corresponde con el molde populista (o regalista) de nuestra tradición política. Nunca existe la convicción de que los ciudadanos tienen derechos que el Estado debe reconocer (que en la tradición liberal puede llegar hasta la afirmación del derecho de rebelión y desobediencia civil), sino que prevalece la concepción de que el Estado concede y otorga graciosamente tales derechos, sobre todo cuando son gentilmente solicitados y debidamente agradecidos con lealtad y obediencia política. El llamado “empoderamiento” ciudadano del que se ha hablado en el último tiempo debería estar acompañado de un aumento en la aceptación de la violencia social, pero no ocurre tal cosa en los datos de la Encuesta Nacional Bicentenario. La aceptación de la violencia étnica, por ejemplo, “cuando las minorías indígenas reclaman tierras ancestrales”, es extremadamente modesta (20%), lo mismo que “cuando una comunidad busca mejores condiciones de vida” (25%) o “cuando los trabajadores luchan por aumentar sus salarios” (31%). Un uso moderado de la fuerza para llamar la atención de una autoridad indolente y obligarla a comparecer, parece ser el límite de aceptación que tiene la violencia social. La violencia propiamente política ejercida en nombre de demandas socialmente legítimas no encuentra un soporte importante como tal vez lo tuvo hace cincuenta años, cuando se inauguró el ciclo de radicalismo político que condujo a la espiral de violencia que se conoce.

La violencia social tiene una fuerte gradiente socioeconómica: aparece ligeramente más aceptada en el nivel medio (respecto del alto), pero mucho más entre los más pobres (hasta dos veces aumenta la probabilidad de justificar la violencia en este segmento). Curiosamente, en estos mismos niveles es posible encontrar mayor justificación para la violencia estatal, lo que confirma la actitud paradójica hacia el Estado que existe entre los pobres, donde las demandas sociales son más acuciantes, pero también lo son la dependencia frente al Estado

y las necesidades de protección y control social. La justificación de la violencia tiene, por el contrario, un componente ideológico que se comporta en la dirección esperada: la derecha tolera más la violencia estatal y menos la violencia social y, viceversa, la izquierda acepta mejor la violencia social y rechaza la estatal. Las variaciones son relativamente moderadas, salvo para la justificación de la violencia estatal entre aquellos que se identifican como de derecha, donde la probabilidad de aceptación se eleva hasta 47% por encima de los que se identifican como de izquierda. Estos resultados muestran que el clivaje ideológico está desprendido del clivaje de clase en este aspecto, y que la izquierda puede encontrar un soporte para la violencia social entre los más pobres, pero es poco probable que encuentre aceptación para cualquier forma de violencia dirigida expresamente contra el Estado. La derecha, en cambio, aparece más alineada con los más ricos, que rechazan la violencia social y aparecen más tolerantes frente a la violencia ejercida por el Estado, tal como se espera en este caso.

Los datos que ofrece la Encuesta Nacional Bicentenario sobre violencia son inéditos y constituyen un área de explotación de opinión pública con pocos antecedentes. Varias preguntas e interrogantes quedan pendientes con

este primer vistazo. ¿Es Chile un país violento? La falta de datos comparativos nos impide responder esta pregunta, pero algunos ámbitos de preocupación aparecen en el contexto de esta información preliminar. Por ejemplo, la violencia privada no recibe aún toda la sanción social que podría esperarse y existe todavía un umbral de tolerancia hacia la violencia de género bastante amplio que debe ser objeto de atención pública. Por el contrario, la violencia delictual está muy penalizada y en ocasiones se exagera la respuesta social o estatal frente a ella: los delincuentes son despojados muchas veces de sus derechos y se justifica el ejercicio de violencia desmedida contra ellos. La violencia social no cuenta con mucha adhesión, incluso cuando los motivos que la justifican son ampliamente aceptados, lo que ofrece —por contrapartida— un buen signo de civilidad en una población que sostiene el derecho de protestar, pero pacíficamente. La violencia estatal, por último, encuentra mucha legitimidad a la hora de reprimir el delito, pero algo menos cuando se trata de castigar incluso excesos o desbordes de la movilización social, lo que coloca límites también saludables al ejercicio de la forma igualmente más aceptada de la violencia, la que ejerce el Estado en nombre del orden público.

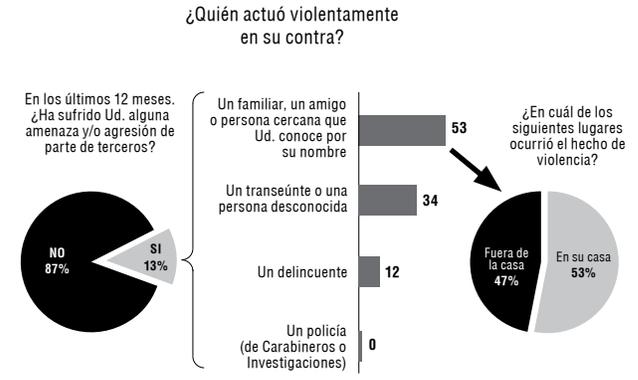
ANEXO

Percepción de violencia: comparación con serie Hamuy de 1970 (%)

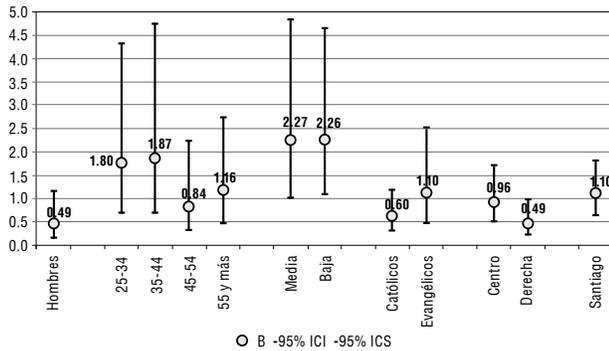


N 1970 = 886. Porcentaje obtenido a partir de la medición de julio de 1970 en el Gran Santiago. N 2010 = 806.
 *La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas "no sabe, no responde".

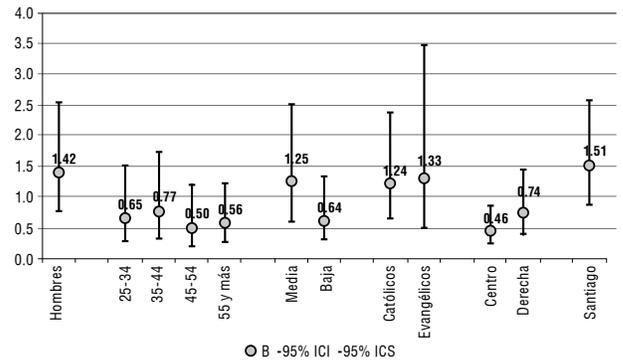
Prevalencia de último año de episodios de violencia



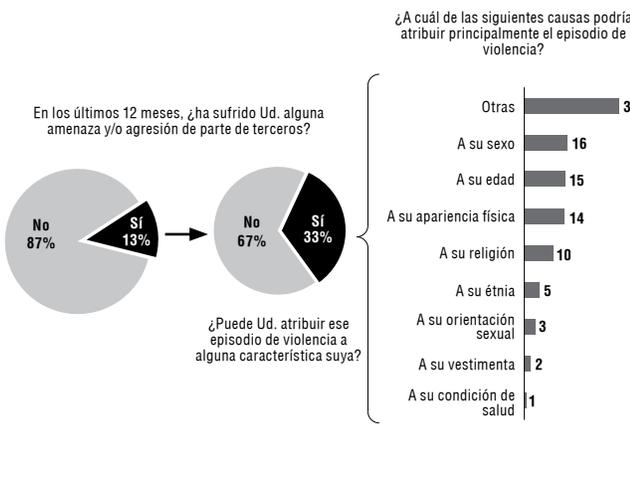
Coefficientes de variación de quienes han sido amenazados o agredidos por familiares, amigos o personas cercanas



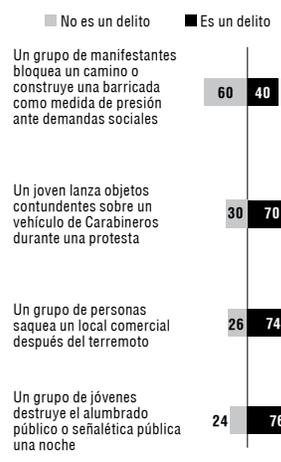
Coefficientes de variación de quienes han sido amenazados o agredidos públicamente (por un transeúnte o delincuente)



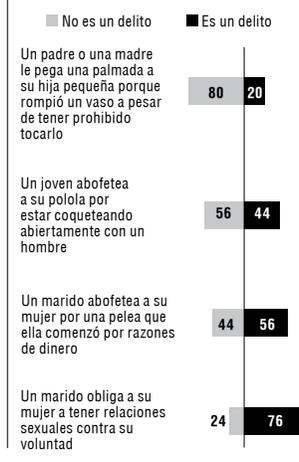
Delitos de odio



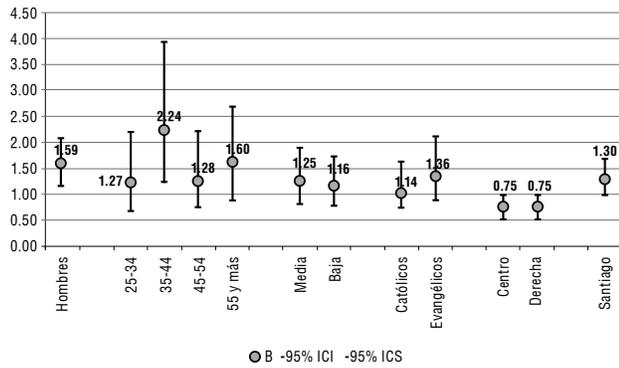
Tolerancia a la violencia pública (%)



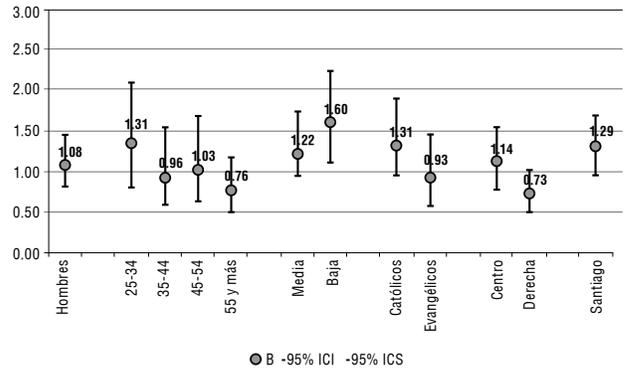
Tolerancia a la violencia privada (%)



Coefficientes de variación de quienes declaran alta tolerancia a la violencia privada



Coefficientes de variación de quienes declaran alta tolerancia a la violencia pública



Violencia estatal

¿Cree Ud. que es justificable que el Estado haga uso de la fuerza pública en alguna de las siguientes situaciones?

■ No se justifica ■ Se justifica siempre

Cuando se producen manifestaciones públicas no autorizadas: 24 (No se justifica) / 33 (Se justifica siempre)

Cuando se bloquean caminos o se levantan barricadas: 20 (No se justifica) / 34 (Se justifica siempre)

Cuando se producen saqueos: 16 (No se justifica) / 58 (Se justifica siempre)

Violencia social

¿Cree Ud. que es justificable que las personas que promueven o defienden las siguientes causas usen la fuerza o la violencia?

■ No se justifica ■ Se justifica siempre

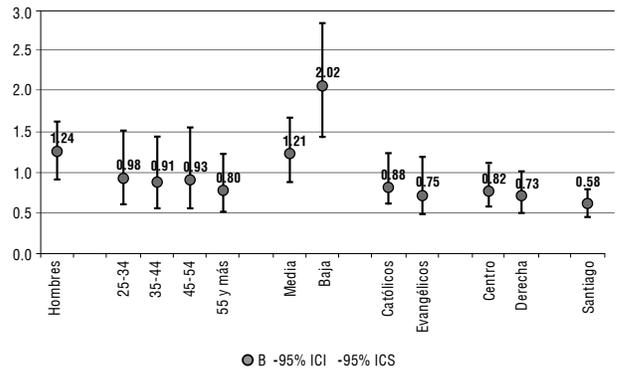
Cuando las minorías indígenas reclaman tierras ancestrales: 40 (No se justifica) / 20 (Se justifica siempre)

Cuando una comunidad busca mejores condiciones de vida: 43 (No se justifica) / 25 (Se justifica siempre)

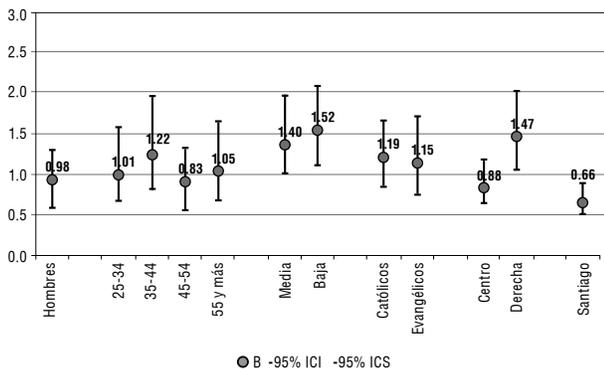
Cuando los trabajadores luchan por aumentar sus salarios: 39 (No se justifica) / 31 (Se justifica siempre)

*Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR y la categoría "se justifica en algunas ocasiones"

Coefficientes de variación de quienes declaran alta justificación a la violencia social



Coefficientes de variación de quienes declaran alta justificación a la violencia estatal

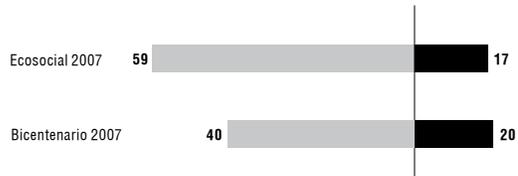


Violencia étnica

¿Cree Ud. que es justificable que las personas que promueven o defienden las siguientes causas usen la fuerza o la violencia?

"Cuando las minorías indígenas reclaman tierras ancestrales"

■ No se justifica ■ Se justifica siempre



*Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR y la categoría "se justifica en algunas ocasiones"

Comentario

JAVIERA BLANCO,

directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana

En la intervención del profesor Eduardo Valenzuela se nos presentan los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario correspondiente a la sección de violencia pública y violencia privada en el Chile actual, sondeo que se realizó entre el 25 de junio y el 25 de julio del 2012 a poco más de 2.000 hogares.

La primera observación que me gustaría realizar tiene que ver con la definición y alcance de la palabra violencia.

La violencia en nuestro país ha sido escasamente medida y definida. De hecho, los antecedentes cuantitativos que tenemos de ella responden en algunos casos a una misma problemática diferenciada según el lugar de ocurrencia. Así, es posible pensar en la violencia que se puede ejercer en el ámbito escolar, que denominamos violencia escolar y cuando se transforma en hostigamiento se convierte en *bullying*; aquella que se ejerce al interior del hogar, que se denomina violencia intrafamiliar; o en el trabajo, violencia laboral.

Por otro lado, a la violencia que se ejerce en el espacio público por un desconocido le llamamos violencia delictual. En este último punto se puede distinguir entre violencia objetiva (asociada a comisión de delitos) o subjetiva (temor). O pensar en la violencia presencial o vicaria también, es decir, no soy víctima, pero sí testigo presencial o de oída. ¿En cuánto puede afectar una u otra calidad en la percepción y sensación que yo tenga de la violencia?

Frente a este escenario caben varias interrogantes: ¿es posible hablar de un mismo fenómeno en todos estos casos? ¿Se puede pensar que estas violencias han permanecido estables en el tiempo? En cuarenta años, ¿el concepto que se maneja de violencia es el mismo? ¿Nos estamos refiriendo a hechos similares o es que en la valoración hay nuevos elementos que podrían tornar incomparables estas cifras? Si fuera así, ¿el concepto de violencia hoy es unívoco o refiere a más de una realidad?

En cuanto a si la violencia hace referencia a un mismo fenómeno, pero que se presenta en plataformas diferenciadas, basta referirse a modo de ejemplo a lo expuesto por la encuesta Paz Ciudadana-Adimark, dada a conocer en enero de 2013, que muestra una baja pronunciada en victimización, más un aumento considerable de la violencia en el barrio. ¿Cómo puede entenderse esto?

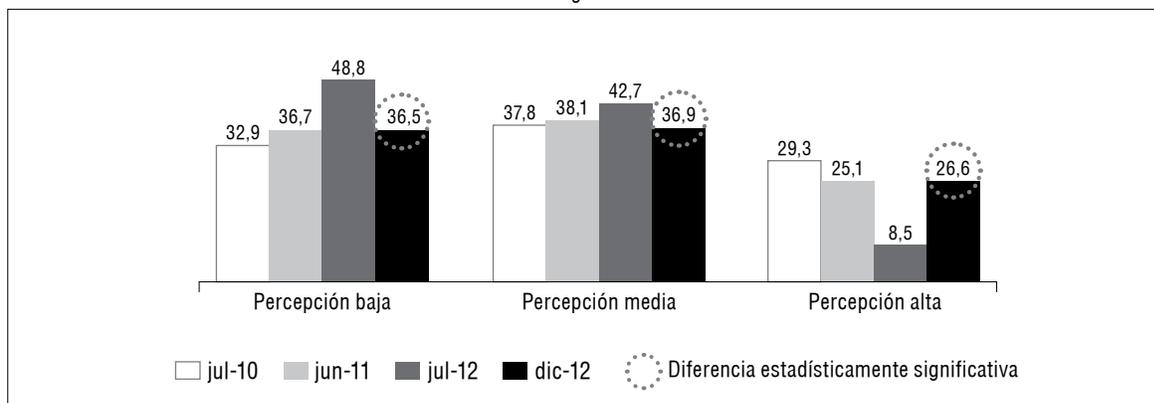
A partir del Índice Paz Ciudadana (IPC) se crea el índice de violencia en el barrio, que pondera las siguientes variables:

- En los últimos meses, ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima/testigo de algún hecho de violencia física fuera del hogar? (SI/NO).
- En el último tiempo, ¿ha visto hechos de violencia en su barrio? (SI/NO).
- En el último tiempo, ¿ha escuchado hablar de violencia en su barrio? (SI/NO).
- En su opinión, ¿la violencia en su barrio en los últimos meses ha aumentado, sigue igual o ha disminuido?

Una situación similar ocurre al analizar la integración de delitos violentos y no violentos: mientras a principios de la década eran el 24% del total, hoy corresponden al 29%.

Figura 1 | Índice de percepción “nivel de violencia en el barrio”

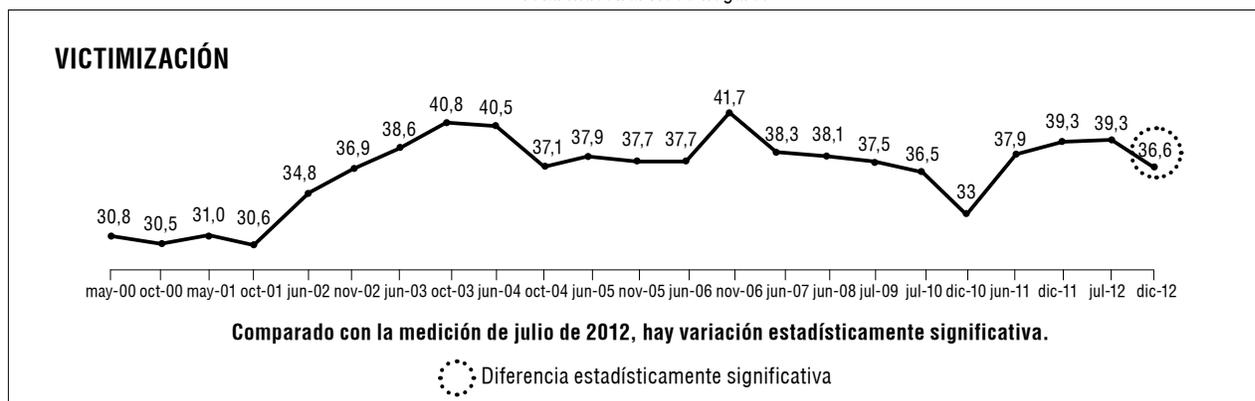
Total muestra: 7.089 hogares en diciembre de 2012



Fuente: IPC, 2012.

Figura 2 | Hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo (últimos 6 meses)

Total muestra: 7.089 hogares



Fuente: IPC, 2012.

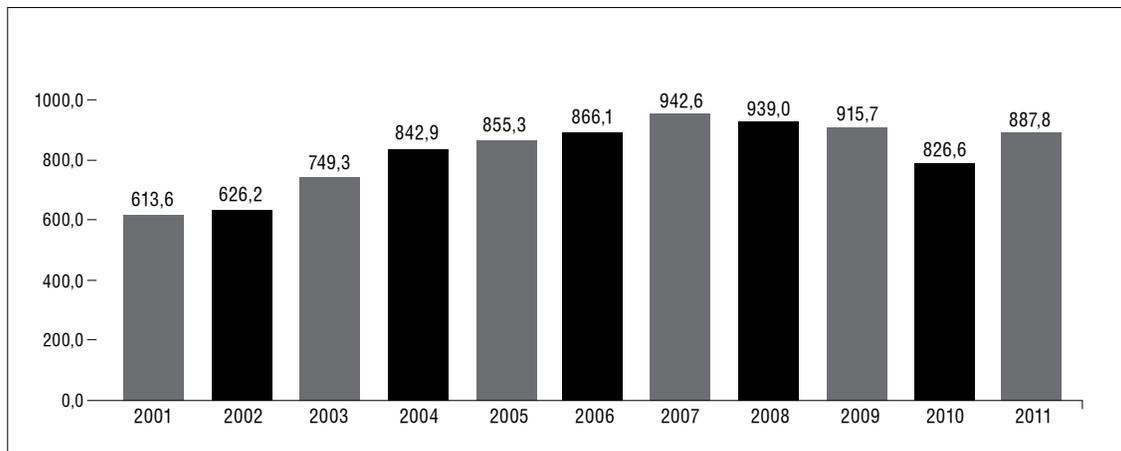
Figura 3 | Distribución porcentual de hechos delictuales (robos o intento de robos) con y sin violencia (últimos 6 meses)

Total hechos delictuales



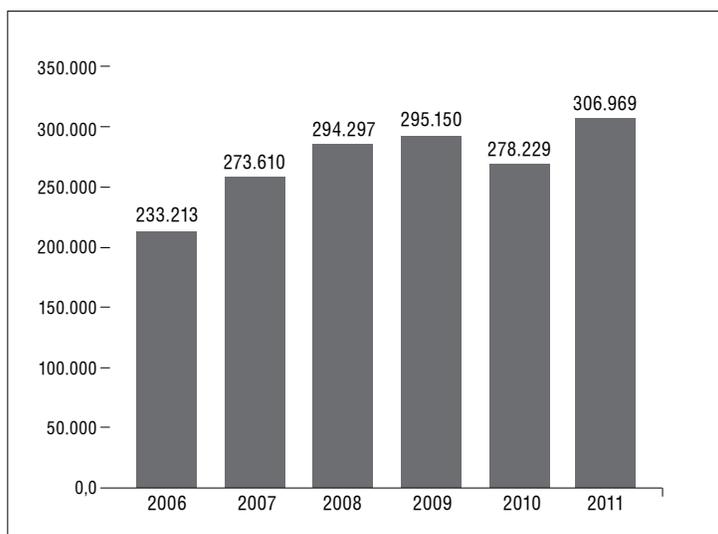
Fuente: IPC, 2012.

Figura 4 | Tasa nacional de denuncias por delitos violentos



Fuente: Ministerio del Interior y Ministerio Público, 2011.
 Considera: robo con violencia, lesiones, violación y homicidios.

Figura 5 | Delitos violentos ingresados al Ministerio Público



Fuente: Ministerio del Interior y Ministerio Público, 2011.
 Considera: robo con violencia, lesiones, violación y homicidios.

Lo que hoy está claro es que parece ser posible distinguir dos tipos de violencia asociadas a realidades diferentes. Por un lado, aquella que concentra hechos de delincuencia común vinculados a delitos de oportunidad (alta concentración de comercio, población flotante). El estudio la denomina como violencia pública o delictual y, de acuerdo a las cifras expuestas, ha disminuido en el último año. Por otra parte, están aquellos barrios que presentan mayormente hechos de violencia social, como violencia intrafamiliar, violencia escolar, presencia de

pandillas, riñas, alta prevalencia de consumo problemático de alcohol y drogas, etc. y que el estudio asimila a violencia privada o violencia social. Este tipo no ha registrado el mismo comportamiento a la baja que la delincuencia común, lo que explicaría la dicotomía entre la menor criminalidad que muestra la encuesta Paz Ciudadana y el aumento de percepción de violencia en el barrio arrojado por el mismo instrumento. En cada caso, la violencia presenta particularidades que exigen generar intervenciones *ad hoc*.

Figura 6 | Esquema de violencia



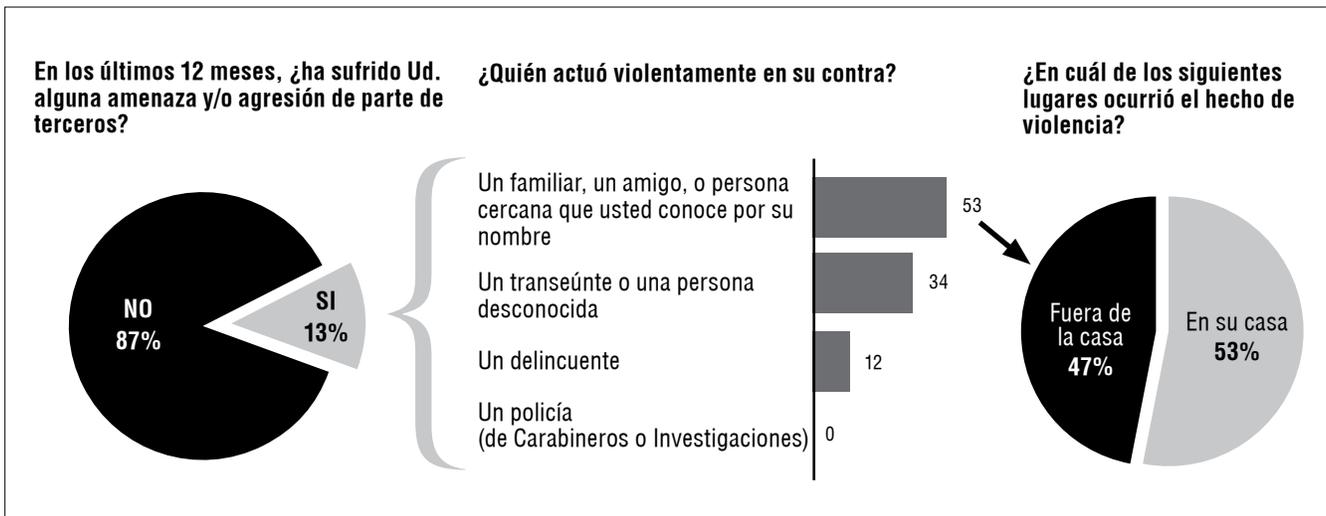
Fuente: elaboración propia.

Sea cual sea la definición que hoy se tiene de la violencia en general, se sabe que es un sentir bastante extendido. De esta manera, más que la estabilidad en 40 años –que puede estar sesgada por la diferente conceptualización que se haga de ella– llama la atención que el 30% de la población, o sea, 1 de cada 3 chilenos, considere que si bien existe violencia, no se debe exagerar. Esto permite intuir que las personas entienden que este tipo de problemas no se encuentran extendidos al punto de poner en jaque la estabilidad institucional, aunque afectan fo-

calizada y gravemente a ciertos sectores que sí parecieran ver mermada su calidad de vida más profundamente que el promedio nacional.

De hecho, el 24% de los hogares concentra el 90% de la victimización y la mayor parte de ellos se focaliza en la zona sur poniente de Santiago. Esta concentración se corrobora con el 13% de encuestados que señala haber sido víctima de amenaza o agresión en los últimos 12 meses, y que en más de la mitad de los casos se trata de

Figura 7 | Víctimas de violencia

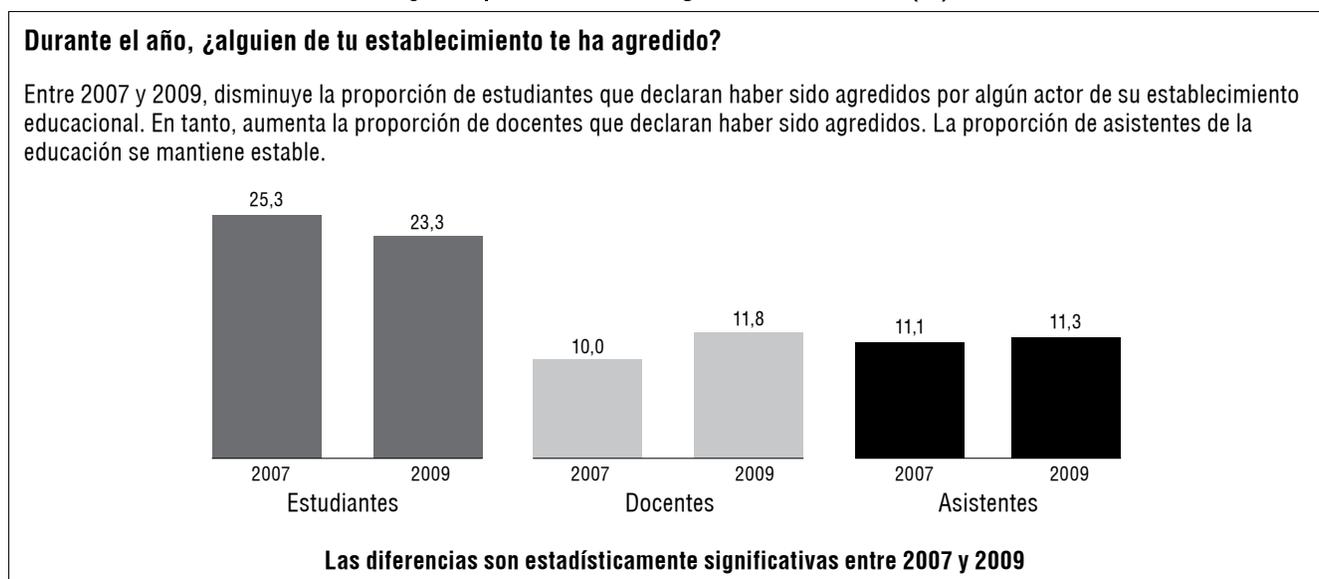


Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark, 2012.

personas conocidas, dando cuenta de que la mayoría de estas situaciones se encontrarían vinculadas a entornos cercanos, como lo pueden constituir la familia (violencia intrafamiliar) o la escuela. Lo anterior aumenta la sensación de vulnerabilidad, toda vez que la convivencia con este tipo de rutinas es más frecuente que la exposición a temas de delincuencia común, que representan el 12% de las personas que dicen ser vulnerables a amenaza o agresión (que a su vez es el 13% del total).

Es en este marco que Eduardo Valenzuela asegura que “el grueso de la violencia pública proviene de contactos con población no delictiva”. Al respecto, podríamos decir que la delincuencia asociada a personas conocidas se vincula a violencia intrafamiliar física y psicológica, violencia escolar, *bullying* y violencia relacionada con el consumo abusivo y/o problemático de drogas.

Figura 8 | Declaración de agresión 2007 - 2009 (%)



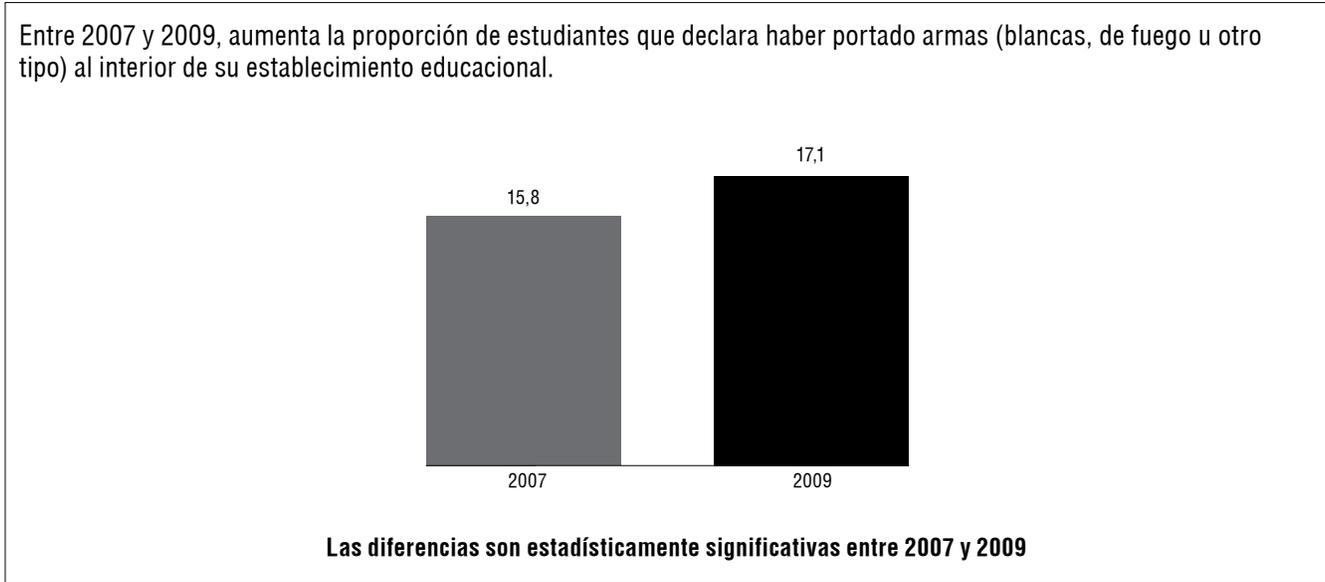
Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Escolar, 2009.

Figura 9 | Estudiantes víctimas de hostigamiento permanente y discriminación (*bullying*) 2007 - 2009 (%)



Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Escolar, 2009.

Figura 10 | **Porte de armas declaradas por estudiantes 2007 - 2009 (%)**



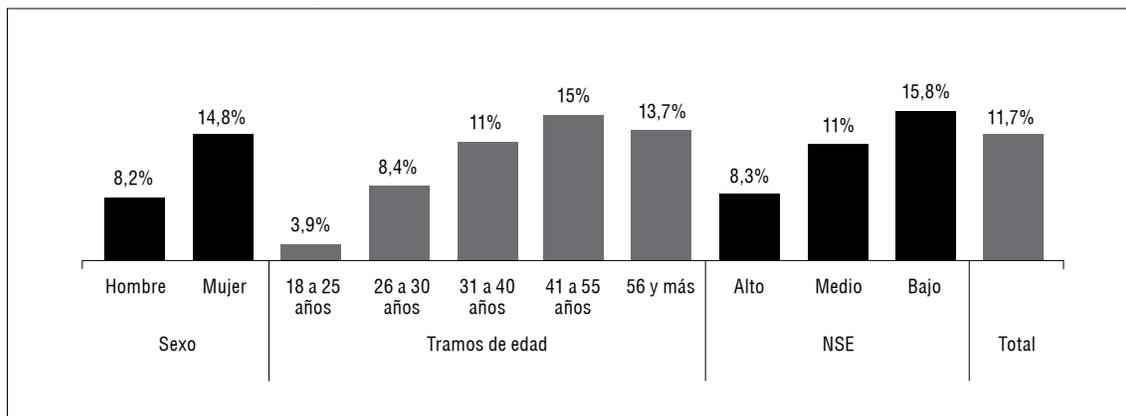
Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Escolar, 2009.

En cambio, la violencia asociada a personas desconocidas se circunscribiría a delitos comunes, como robo con violencia e intimidación, lesiones (no origen en violencia intrafamiliar), homicidios, violaciones (en estos casos por desconocidos), daños, entre otros. Esta violencia, como ya se ha mostrado en gráficos anteriores, ha aumentado progresivamente en los últimos 10 años, aunque registra una baja pronunciada en la reciente encuesta de Paz Ciudadana.

Radiografía de la violencia

La Encuesta Nacional Bicentenario muestra que quienes están más expuestos a experimentar violencia (definida en este caso como amenaza o agresión por parte de desconocidos o delincuentes) son los hombres, los jóvenes, de nivel socioeconómico medio y bajo, y quienes viven en Santiago. Sin embargo, de acuerdo a la encuesta de Paz Ciudadana, quienes señalan tener alto temor de su-

Figura 11 | **Índice de temor alto, 2º semestre 2012**



Fuente: IPC, 2012.

frirla son las mujeres, mayores de 55 años, de menor nivel socioeconómico y que viven en Santiago.

En los delitos de odio se tiene ya un primer indicio de que los conceptos de violencia no pueden haber permanecido estáticos en el tiempo. Si se observan las causas para atribuir episodios de violencia, se tiene que la apariencia física se eleva muy por sobre la orientación sexual, lo que habla de una sociedad que hoy se abre a una mayor y mejor integración de la diversidad.

De igual forma, llama la atención que las personas efectivamente distinguen los hechos delictivos, o violencia asociada a delincuencia común, de aquellos relativos a manifestaciones sociales. Según la Encuesta Nacional Bicentenario, el 60% cree que las manifestaciones no son delito. No obstante, sí califica como delictual los actos

de vandalismo que suceden en estos eventos y que son organizados por grupos ajenos a estas manifestaciones (70% cree que sí es delito cuando un joven lanza objetos a Carabineros en una protesta y 76% califica como delictual que un grupo de jóvenes destruya en la noche el alumbrado público).

La evidencia, además, confirma lo anterior, ya que de acuerdo al índice Paz Ciudadana de 2011 la delincuencia aumentó, concentrándose especialmente en las regiones donde no se produjo la mayor parte de las manifestaciones de la época por el tema educacional. Así, mientras en Talca, Puerto Montt y Antofagasta sí se incrementaron los índices de violencia, en la Región Metropolitana y Concepción, que sufrieron una mayor frecuencia de manifestaciones, no registraron alzas tan pronunciadas.

Figura 12 | Tolerancia a la violencia



Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark, 2012.

Estos datos van unidos a aquellos relevados por Eduardo Valenzuela en cuanto a que la violencia estatal es justificable, con un alto nivel de adhesión, cuando se producen saqueos, pero no cuando se registran manifestaciones públicas, aunque no sean autorizadas. Nuevamente hay una clara distinción entre el mundo propiamente delictual y el que se orienta a la manifestación respecto de aspiraciones sociales.

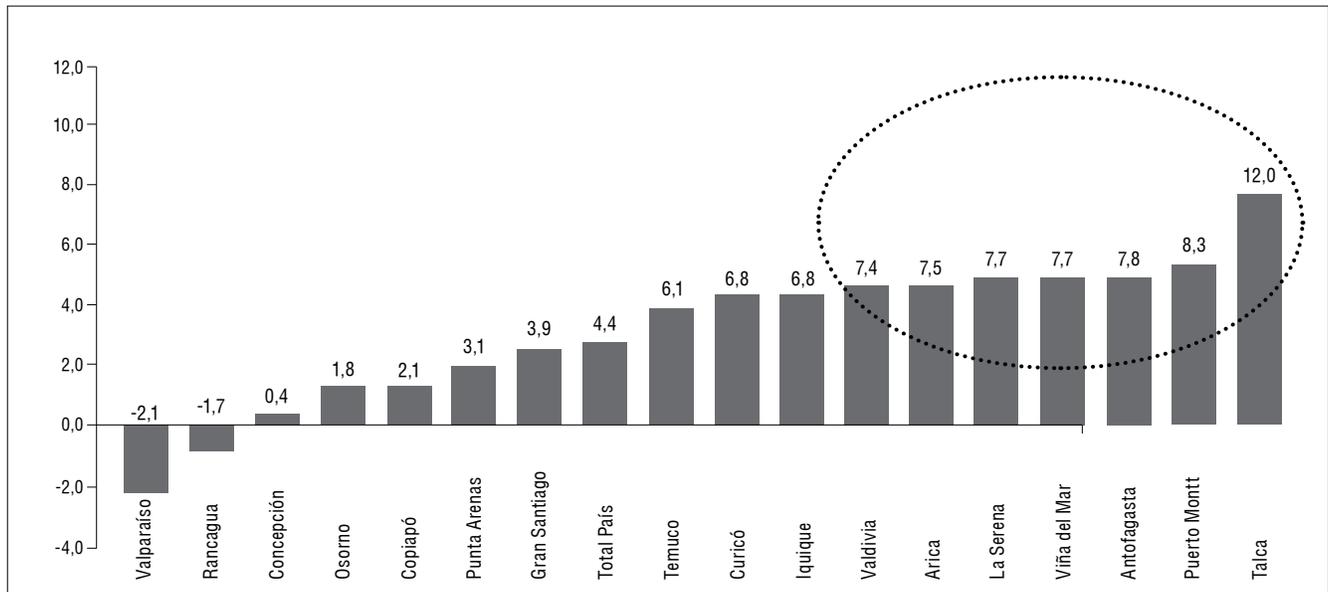
De igual forma, preocupa el límite de lo socialmente aceptable como violencia o delito. Ello por la baja percepción de violencia en relación a hechos como maltrato a menores y a la pareja (palmada a hija pequeña, abofeteo a polola que coquetea con otro). Pareciera ser que la causal

de base justifica los medios: si la razón de la disputa es “coqueteo”, se aprueba el uso de violencia; si la causal es un “problema económico”, no se justificaría.

No obstante lo anterior, sí constituye un hecho positivo de resaltar que el 70% de la población encuestada considere tener una baja tolerancia a la violencia pública y privada.

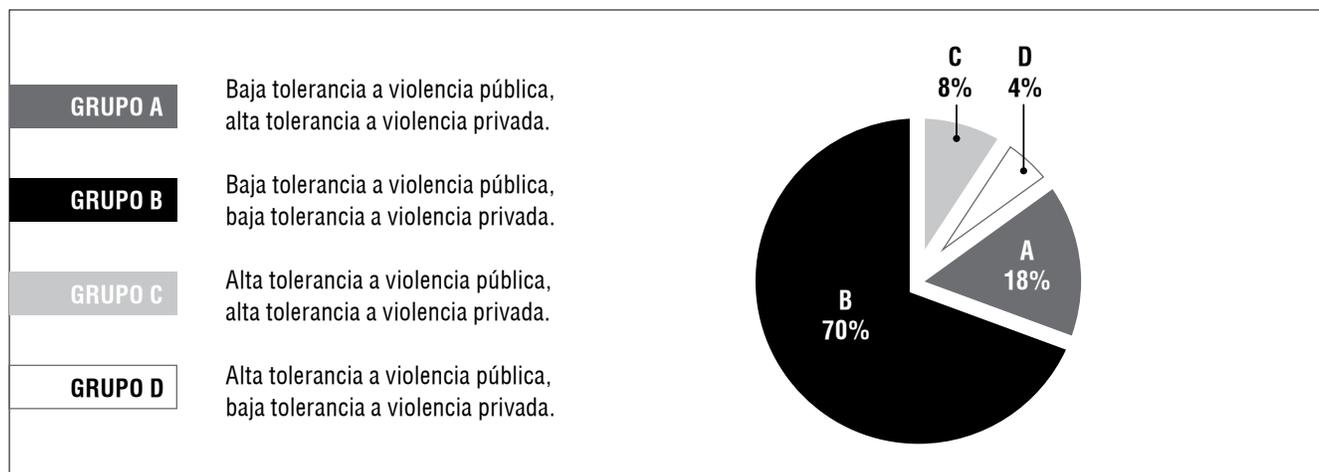
Esta situación, que parece homogéneamente compartida al menos por 7 de cada 10 encuestados, adquiere un carácter más difuso al sondear respecto de violencias sociales (referidas a casos de reclamaciones indígenas por tierras ancestrales o en la búsqueda de mejores condiciones de vida), o en hechos de violencia estatal (manifestaciones públicas, bloqueo de caminos, saqueos).

Figura 13 | **Victimización principales ciudades. Variación interanual 2010 - 2011 (%)**
Índice Paz Ciudadana Adimark GfK



Fuente: IPC análisis comunal 2010-2011.

Figura 14 | Identificación de grupos según nivel de tolerancia a la violencia



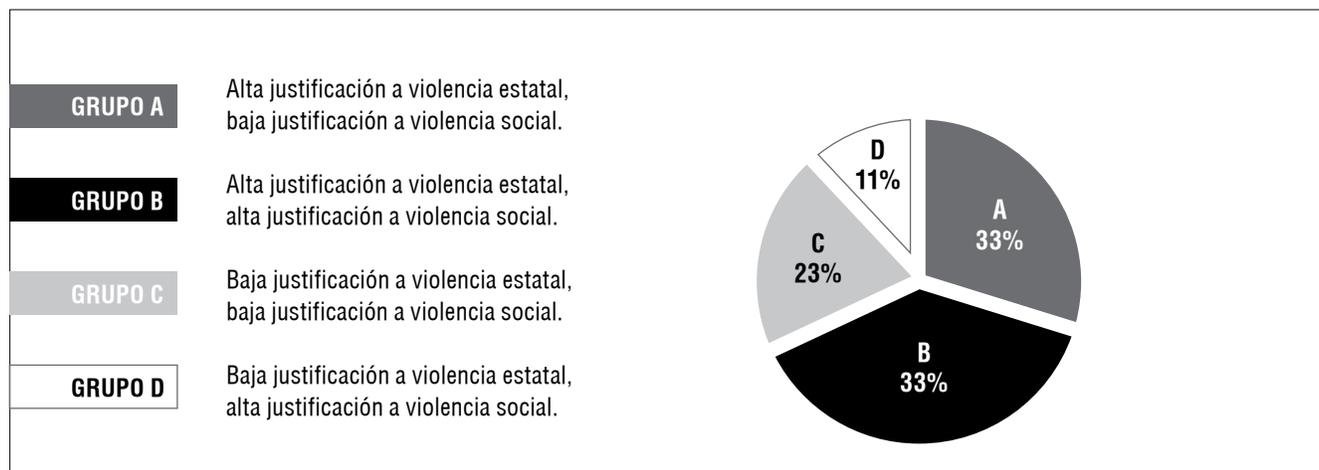
Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark, 2012.

En estos temas, los niveles de justificación se dividen en tres grupos: 33% (alta justificación a violencia estatal y baja a violencia social); 33% (alta justificación a violencia social y estatal), y 23% (baja justificación a violencia estatal y social).

Así, a diferencia de la compartida y generalizada intolerancia a la violencia privada y pública —donde es mayoritario el rechazo—, la posición frente a las violencias sociales y estatales no reúne porcentajes mayoritarios en

ninguna opción. Lo anterior puede incidir en la relativa sostenibilidad y estabilidad de las políticas y programas para hacer frente a estas problemáticas de violencia social y delictual. Ello resulta especialmente relevante en periodos de cambios de gobierno, frente a las continuas fluctuaciones de criterios e incertidumbres asociadas al devenir de los temas que concitan menor adhesión común frente a una postura (tolerancia o intolerancia), como lo es la problemática indígena.

Figura 15 | Identificación de grupos según nivel de justificación a la violencia



Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark, 2012.

Comentario

RODRIGO PANTOJA,

jefe del Departamento de Reinserción Social del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

En primer lugar, quiero agradecer a nombre de la Subsecretaría de Prevención del Delito la invitación formulada por la Universidad Católica para comentar la Encuesta Nacional Bicentenario, la cual consideramos un gran aporte al análisis de temas complejos, como la violencia y el delito, que son los que nos ocupan como institución.

Hay una serie de puntos específicos que creemos que ameritan un breve comentario. En principio, y esto no es una crítica, porque va más allá de los objetivos de la encuesta, nos llama la atención que la muestra se centre en población adulta. Si tenemos en consideración las múltiples discusiones de expertos y organizaciones públicas y privadas respecto de la relevancia e impacto social que tiene la experiencia de la violencia en la vida cotidiana de niños y adolescentes, pensamos que sería de gran interés ampliar la muestra en réplicas del estudio. De esta manera, sin perder comparabilidad con sondeos anteriores, se podría recoger información sobre las experiencias de violencia de niños y adolescentes. Esta idea nos parece especialmente atractiva debido a la acuciosidad, profundidad y representatividad de la encuesta que hoy comentamos.

Respecto del mismo ámbito, quiero presentar algunos datos a modo de complemento. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha desarrollado encuestas de victimización específicamente para población infanto-juvenil. Esta encuesta no es lo único que hay en la materia, existen estudios previos. De hecho, UNICEF ha logrado generar una serie de investigaciones, aunque sin alcanzar representatividad a nivel nacional. Todos estos trabajos son consistentes en señalar que la población infanto-juvenil está muy afectada por la violencia, fundamentalmente en el seno de la familia, siguiendo

los términos expuestos por Javiera Blanco, directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana. Podemos decir que, lamentablemente, la violencia forma parte de la experiencia cotidiana de muchas personas y está arraigada al interior de los hogares y de las relaciones familiares, lo cual produce efectos en la convivencia social fuera de la casa, en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo de repertorios conductuales en los menores.

Específicamente, en el estudio de victimización de 2008, el 72% de los niños afirmó haber sido víctima, en algún momento de su vida, de violencia. En tanto, el 33% reportó haber sufrido algún episodio de violencia física grave cometido por alguno de los padres. Entonces, estamos hablando de un tercio de la población infanto-juvenil en una encuesta que logró ser representativa a nivel nacional.

Si bien se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los niños y se ha hecho un trabajo de difusión y campañas para la prevención de la violencia contra este grupo, lo anterior resulta claramente insuficiente. Mediante métodos promocionales no estamos logrando impactar en la violencia contra los niños y adolescentes.

En este sentido, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha asumido un enfoque preventivo y ha puesto énfasis en causas comunes al delito y la violencia. En el caso de la violencia contra los menores, hemos notado que típicamente se relaciona con problemas de funcionalidad familiar que pueden incluir múltiples formas de negligencia que, a su vez, pueden producir riesgo delictual. Esto no apunta a establecer una relación lineal entre ser víctima de violencia e iniciar una carrera delictual, pues son relativamente pocos los niños agredidos que terminan delinquir. A lo que apuntamos es a señalar que muchas veces violencia y delito tienen causas comunes. En el caso de los menores, las condiciones que más les afectan se relacionan con la funcionalidad familiar.

Desde un enfoque preventivo, la Subsecretaría está trabajando con las familias más negligentes, donde exis-

ten mayores problemas de funcionalidad familiar, para corregirlos y así reducir la exposición de los menores a situaciones de violencia, además del riesgo de participación en actos delictuales, deserción escolar y consumo de drogas. Para hacer este trabajo, estamos analizando los listados de ingresos de niños a unidades policiales generados por el Programa “24 Horas” de Carabineros de Chile, detectando a quienes tienen mayores condiciones de riesgo y abandonando enfoques de prevención centrados en la persona del niño para poner el énfasis en la funcionalidad familiar. De esta manera, estamos avanzando en mejorar tanto los problemas de dinámica interna de la familia, incluyendo violencia, como la coordinación entre familias y escuelas, y entre familias y comunidad, para que las familias puedan hacer su trabajo: proteger y garantizar el desarrollo saludable de sus miembros.

Además, la Subsecretaría se está coordinando con el Ministerio de Educación para impulsar un programa de prevención en las escuelas que no solo se concentre en la persona de los menores que participan directamente de actos de violencia, sino fundamentalmente en la institución escolar para generar condiciones de funcionamiento y un clima social que aporte a su prevención. Esta es una mirada que podríamos describir como ecosistémica, que entiende a la escuela como una institución compleja con dinámicas propias y en la cual debemos comprender cómo aportan a producir o mantener actos violentos los distintos actores: quienes cometen violencia, quienes la sufren, y quienes la observan o saben de ella, pero no logran actuar eficazmente en su prevención y control.

Otro punto que nos interesa comentar es la distinción en la encuesta entre violencia delictual y no delictual. El estudio conceptualiza como delictual la violencia que es cometida por delincuentes, en tanto que ubica en una categoría distinta la violencia sufrida por parte de personas conocidas de la víctima. Nos parece que se ha

avanzado bastante en los últimos años en sancionar y criminalizar la violencia entre personas conocidas. Estos logros van tanto en la línea de la sensibilización de la población, como en la legislación y, en general, se dirigen a plantear que las relaciones o vínculos afectivos entre personas no justifican actos de violencia entre quienes forman la pareja o la familia. Un acto de violencia es un delito, con independencia de quien lo comete. Hay que tener cuidado con naturalizar la violencia en la esfera de la vida privada. La seguridad siempre es un asunto público, aunque los problemas de seguridad ocurran en la intimidad de la familia. Ese es el enfoque que nosotros hemos adoptado como país y que nos permite abordar el problema de la violencia intrafamiliar.

El tema de la violencia entre conocidos no solo tiene que ver con lo que pasa dentro de la familia; también hemos notado actos de violencia entre personas conocidas que son vecinos, que conviven en el mismo barrio. Este es un ejemplo muy concreto de cómo el Ministerio de Interior se ha preocupado de la violencia mucho más allá de la que es estrictamente delictual. Todos los programas territoriales de prevención del ministerio incluyen un componente de justicia local y acción comunitaria. Este componente realiza una activa promoción de métodos pacíficos de resolución de conflictos, genera capacidades en los vecinos y organizaciones para manejar sus diferencias, y ofrece servicios profesionales de mediación de conflictos cuando esto es requerido voluntariamente por la comunidad.

En fin, hay muchos otros puntos posibles de comentar respecto de la Encuesta Nacional Bicentenario, pero un limitado tiempo para ello. Terminó mi presentación reiterando las felicitaciones y agradecimiento a los autores, pues el estudio constituye un gran aporte a la investigación de la violencia en Chile.

Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2012

Edición

Marcela Alam

Corrección de estilos

Magdalena Letelier

Diseño

Diseño Corporativo UC

Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua

Impresión

Salviat Impresores

500 ejemplares



CENTRO DE
**POLÍTICAS
PÚBLICAS UC**

www.politicaspublicas.uc.cl
politicaspublicas@uc.cl

SEDE CASA CENTRAL

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 324, piso 3, Santiago.
Teléfono (56-2) 2354 6637.

SEDE LO CONTADOR

El Comendador 1916, Providencia.
Teléfono (56-2) 2354 5658.

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

- Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos • Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
- Facultad de Ciencias Sociales • Facultad de Derecho • Facultad de Educación
- Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política • Facultad de Ingeniería • Facultad de Medicina